



COVITE

Colectivo de Víctimas
del Terrorismo



OIET

OBSERVATORIO INTERNACIONAL
DE ESTUDIOS SOBRE TERRORISMO

TERRORISMO, TRATA DE SERES HUMANOS Y CONTRABANDO DE MIGRANTES

ANÁLISIS DE SITUACIÓN EN ÁFRICA Y ORIENTE MEDIO



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA
Y COOPERACIÓN



COVITE

Colectivo de Víctimas
del Terrorismo



OIET

OBSERVATORIO INTERNACIONAL
DE ESTUDIOS SOBRE TERRORISMO

TERRORISMO, TRATA DE SERES HUMANOS Y CONTRABANDO DE MIGRANTES

ANÁLISIS DE SITUACIÓN
EN ÁFRICA Y ORIENTE
MEDIO

ANA AGUILERA | 2024

© de la edición: COVITE, 2024

COVITE

Apdo. de Correos 3358

20080 San Sebastián (Guipuzkoa) (España)

© de los textos: Su autor

Reservados todos los derechos. Ni la totalidad ni parte de esta publicación pueden reproducirse o transmitirse de ninguna forma o por ningún medio, sea electrónico, mecánico, reprográfico, fotoquímico, óptico, de grabación o cualquier otra forma de almacenamiento de información o sistema de recuperación, sin el permiso previo y por escrito del editor.

Imagen de portada: REUTERS/Rodi Said

Texto: Ana Aguilera

Coordinación: Carlos Igualada

Diseño: Romina da Silva

RESUMEN EJECUTIVO

Las dinámicas de la economía ilícita que rodean al negocio de la explotación humana han ido escalando posiciones entre actores criminales hasta alcanzar aquellos con una agenda política de naturaleza extremista, llevando a asociar la explotación de personas, muchas de ellas en situación de vulnerabilidad, bajo el espectro y dominio de la actividad terrorista. El producto de estos delitos ha terminado por contribuir directa e indirectamente a una parte de la agenda terrorista, perpetuando un ciclo permanente de explotación difícil de desmantelar.

Los grupos terroristas, como muchos otros actores armados no estatales, han mostrado un interés genuino por el mercado de la explotación humana debido a su capacidad multifunción y a su posible uso como táctica tanto operativa como financiera. Esto los ha llevado a instrumentalizar las actividades del crimen organizado como parte de su *modus operandi*. En consecuencia, e independientemente de los reveses militares o las pérdidas territoriales que puedan sufrir en algunos espacios, el terrorismo se ha convertido en uno de los actores más activos a la hora de cometer actos criminales de lo que se conoce como “la esclavitud moderna”, incluyendo delitos sexuales contra mujeres y niños, reclutamiento forzoso y actividades de intimidación y adoctrinamiento, entre otros.

El presente proyecto analiza los vínculos entre el terrorismo y el crimen organizado dedicado a la trata y el contrabando de personas. Basándonos en un análisis exhaustivo de información proveniente de fuentes abiertas, locales y organismos de seguridad pública, el estudio tiene el objetivo de concretar la relación existente de manera actualizada e identificar formas de combatir esta relación híbrida.

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN	7
2. TERRORISMO Y CRIMEN ORGANIZADO: FENÓMENOS HÍBRIDOS	10
2.1. LA EXPLOTACIÓN HUMANA COMO MÉTODO DE FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO.....	12
2.2. LA EXPLOTACIÓN HUMANA COMO MÉTODO OPERATIVO DEL TERRORISMO.....	18
2.2.1. Empleo como táctica de guerra.....	19
2.2.2. Empleo como táctica de reclutamiento.....	20
2.2.3. Empleo como táctica identitaria.....	22
2.2.4. Empleo como táctica de movilidad.....	23
3. FACTORES QUE FOMENTAN LA EXPLOTACIÓN HUMANA EN ÁFRICA Y ORIENTE MEDIO	24
3.1. FRONTERAS POROSAS Y ESCASAMENTE CONTROLADAS.....	25
3.2. FRAGILIDAD INSTITUCIONAL, CORRUPCIÓN Y AUSENCIA DE GOBERNANZA POLÍTICA.....	26
3.3. SUBDESARROLLO Y POBREZA.....	28
3.4. CONFLICTOS ARMADOS.....	30
4. DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA: CASOS DE ESTUDIO	33
4.1. ESTADO ISLÁMICO EN IRAK Y SIRIA.....	34
4.2. ESTADO ISLÁMICO EN LIBIA.....	42
4.3. JNIM EN EL SAHEL OCCIDENTAL.....	52
4.4. BOKO HARAM EN NIGERIA.....	60
4.5. AL SHABAAB EN SOMALIA.....	65
5. ESFUERZOS Y RECOMENDACIONES	71
6. CONCLUSIONES	76
7. REFERENCIAS	81

1. INTRODUCCIÓN

La trata de personas, considerada la tercera industria criminal más grande del mundo después del tráfico de drogas y armas, constituye el principal mercado criminal en África según el Índice del Crimen Organizado Global (2023). Si atendemos a las cifras de la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2019), vemos cómo este negocio recauda unos beneficios de 150 billones de dólares anuales explotando a las casi 50 millones de personas que en algún momento de su vida sufren lo que el Índice Global de la Esclavitud denomina, en su última edición de 2023, una nueva forma de “esclavitud moderna” (Índice Global de la Esclavitud, 2023).

El contrabando de migrantes tampoco se queda atrás. Como un fenómeno que se ha reproducido a través de los siglos, esta diáspora migratoria se ha visto facilitada en la actual era de la globalización y la reconfiguración interconectada del sistema económico y financiero mundial, incluyendo tanto a los países en vías de desarrollo como a los países desarrollados. El crimen organizado transnacional ha conseguido capitalizar este proceso, incrementando su cartera de actividades para ofrecer un servicio de transporte de personas por canales tanto legales como ilegales.

El carácter clandestino del contrabando de migrantes y las variables que interceden en el precio final impide que este mercado criminal cuente con estadísticas precisas, aunque algunas investigaciones han conseguido averiguar algunas de las cifras en rutas asentadas en regiones de Europa y América, que ascenderían a los 6.75 billones de dólares en ingresos (GAFI, 2022). En el tránsito que atraviesa las históricas rutas comerciales transaharianas, esta realidad se da de una manera más marcada. En las fronteras entre Chad, Mali, Níger o Sudán se encuentran rutas de tráfico y contrabando de personas bien asentadas que discurren desde el flanco oriental hacia el interior de África Occidental, así como entre África Subsahariana y

el norte de África. En estas regiones, además, transcurre la actividad de importantes agrupaciones terroristas afiliadas a Al Qaeda y Estado Islámico, grupos rebeldes y milicias étnicas, cada uno con una cartera de intereses que se efectúan con el beneplácito del crimen organizado del que buena parte de ellos se beneficia, dedicado al mercado de drogas, armas, petróleo y, naturalmente, personas.

Los migrantes que transcurren por estas rutas se enfrentan a unos grupos criminales que les facilitan el tránsito a cambio de un pago posterior, una cantidad que con frecuencia desemboca en una deuda difícil de costear y a la que los individuos a menudo deben hacer frente mediante prácticas de trabajo forzoso, esclavitud sexual o servidumbre, entre otras. Sin ir más lejos, la prostitución forzosa y la trata de mujeres en Nigeria es un fenómeno tan copioso en términos económicos que a menudo se salda con la venta de éstas a traficantes en otros puntos de África conectados a través de los corredores controlados por redes y otros grupos criminales.

La trata de personas es una actividad criminal generalizada que involucra a una multitud de actores y países. Pensar que solo el crimen organizado o el terrorismo participan en esta actividad es un error. En países como Nigeria y Somalia, tanto las milicias rebeldes como las tropas nacionales son responsables de llevar a cabo violencia sexual indiscriminada contra las mujeres y un reclutamiento masivo de niños soldado, según lo confirman algunos relatos de víctimas rescatadas¹.

Este asunto no es baladí. La trata de seres humanos y el contrabando de migrantes son delitos que atentan directamente contra los derechos humanos fundamentales y generan miles de millones de dólares de beneficios anuales a escala mundial, un volumen que no hace sino aumentar significativamente en contextos de guerra, conflicto y crisis prolongadas. Factores como la inestabilidad política, la erosión del Estado de derecho o la falta de oportunidades y el subdesarrollo económico son algunos de los elementos que cada vez más se entrelazan con las dinámicas de la explotación humana, propiciando una situación de destrucción y desolación de comunidades enteras que sigue sin contar con la respuesta necesaria por parte de administraciones y autoridades, tanto nacionales como internacionales.

.....

1 Fuentes de la Comisaría General de Información (CGI) consultadas por la autora, octubre 2023.

En tiempos más recientes, vemos además un nuevo actor que se incorpora a la ecuación en este ecosistema criminal: los actores no legítimos de carácter terrorista. Ya sea en un escenario remoto o en el vecindario más próximo al foco del conflicto, las investigaciones apuntan a Estado Islámico (EI), Al Qaeda (AQ) o Boko Haram como algunas de las principales organizaciones que han participado – y participan – en este negocio ilegal en base a unos objetivos que, como veremos a continuación, basculan entre la necesidad financiera y sus propios fines estratégicos y operacionales. Uno de los casos más flagrantes que ilustra este fenómeno, aunque no el único, se puede observar en la persecución y posterior abuso de la comunidad yazidí a manos de Estado Islámico en Irak y Siria en el periodo de máximo apogeo de su proyecto de califato en 2014, ampliamente documentado por su continuidad en el tiempo y su particular gravedad.

A través de este y otros casos de estudio, este documento de investigación se propone abordar cómo el terrorismo está relacionado con actividades de trata de seres humanos como instrumento para controlar y explotar a poblaciones vulnerables, promover la ideología y aumentar el reclutamiento, al tiempo que benefician las arcas del grupo.

A pesar de la abundancia de pruebas que apuntan a una conexión entre ambos fenómenos delictivos, demostrar y delimitar el vínculo entre la explotación humana y el terrorismo sigue siendo un reto importante, especialmente en zonas de guerra y conflicto, donde abundan estos delitos pero suelen pasar desapercibidos a consecuencia del caos y la proliferación de otras actividades criminales. Esta dificultad a la hora de evaluar la relación terrorismo-crimen organizado, particularmente en contextos de guerra, no significa que debamos ignorar el asunto, ya que en tales situaciones son amplios colectivos, particularmente aquellos más vulnerables, los que suelen ser presa de los traficantes y se convierten en víctimas de una explotación que trasciende fronteras e ideologías. Aun así, resulta necesario mantener en mente estas limitaciones a lo largo de la presente lectura con el fin de encontrar oportunidades de investigación relacionadas con este fenómeno en el futuro, incluyendo un análisis de situación basado en contextos específicos.

Dejando a un lado el apartado introductorio y conclusivo, la investigación se divide en cuatro bloques principales. En el primero de ellos se abordará la progresiva cercanía entre el terrorismo y el crimen organizado, que ha provocado que en muchas ocasiones se traten como a un solo ente mediante un proceso conocido como *hibridación*. Una vez entendamos lo que los relaciona y acerca, se procederán a evaluar los posibles factores que permiten que la explotación humana sea un mercado al alza en las regiones de África Occidental, el norte de África y Oriente Medio. Para ilustrar mejor este apartado, se procederá a analizar una serie de casos de estudio que se centrarán en ramas regionales y estructuras centrales de los dos movimientos del terrorismo global: Estado Islámico y Al Qaeda. También se analizará un caso de estudio sobre Boko Haram por su pertinencia y utilidad para el objeto de la investigación. Finalmente, se procederá a identificar una serie de recomendaciones a fin de poder arrojar luz sobre el camino a seguir y desplegar así posibles vías de mejora que ayuden a erradicar la expansión de este proceso híbrido y posteriores fórmulas de criminalidad.

2. TERRORISMO Y CRIMEN ORGANIZADO: FENÓMENOS HÍBRIDOS

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas celebró su primera reunión sobre la trata de personas en el contexto de conflictos armados en diciembre de 2015. Durante el debate, el máximo organismo de asuntos de seguridad de Naciones Unidas condenó todos los actos de trata perpetrados por Estado Islámico, Boko Haram y otros grupos, considerando que dichos abusos en un contexto de conflictividad podrían llegar a constituir crímenes de guerra. Para apoyar esta declaración, el Consejo tuvo la oportunidad de acoger a Nadia Murad Basee Taha, Embajadora de Buena Voluntad de la UNODC para la Dignidad de los Sobrevivientes de la Trata de Personas, que relató sus propias experiencias como esclava sexual de Estado Islámico (CTED, 2021: 16).

Como se ha mencionado en el capítulo introductorio, la trata de seres humanos es la tercera industria criminal más grande del mundo, por lo que no es de extrañar que ésta haya supuesto un mercado atractivo para organizaciones terroristas. Con el tiempo, el vínculo entre terrorismo y varias actividades del tráfico de personas como la violencia sexual o el secuestro no han sido novedad, si bien su interconexión no ha sido reconocida por parte de los niveles más altos de los organismos de Naciones Unidas y gobiernos de todo el mundo hasta fechas recientes. Y es que, aunque puedan entenderse como dos fenómenos separados, a menudo el terrorismo y el crimen organizado comparten necesidades comunes y condiciones proclives al trabajo conjunto². Estas dinámicas de interrelación mutua han sido ampliamente debatidas, especialmente por las condiciones de versatilidad y oportunismo que muestran las organizaciones terroristas a la hora de aprovechar estas actividades ilícitas (Jespersion, Ochieng y Burudi, 2022: 6).

Comprender las razones y los métodos terroristas en estas actividades no es tarea sencilla, especialmente porque las investigaciones a menudo se basan únicamente en la existencia de entornos permisivos o la insuficiencia de una arquitectura legal y jurídica internacional contra la financiación del terrorismo. Esta aproximación, sin embargo, no captura realmente la complejidad del entramado.

Los investigadores Nazli Avdan y Mariya Omelicheva (2021) van más allá de este reduccionismo teórico y ofrecen dos grandes conjuntos de categorías que explican las motivaciones detrás de la implicación de los movimientos terroristas en actividades de trata de personas y otros fenómenos criminales: la motivación financiera y la motivación estratégica u operativa. A pesar de que en la práctica la instrumentalización terrorista de la explotación humana suele tener múltiples usos interrelacionados, estas categorías nos permiten establecer una sólida línea metodológica a la hora de clasificar los diferentes motivos y justificaciones que fomentan la involucración del extremismo violento en

.....
2 Para más información sobre la relación entre el terrorismo y algunas de las principales industrias criminales, véanse las siguientes investigaciones: Aguilera, A. (2022). *Tráfico de drogas y yihadismo en África* y Aguilera, A. (2023). *Terrorismo y crimen organizado: tráfico y contrabando de armas en el norte de África y el Sahel*, disponibles en la página web del Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo en versión tanto en español como en inglés.

este mercado criminal. Ambas son complementarias y se basan en 1) engrosar las arcas de la estructura terrorista, asegurando así su supervivencia, y 2) legitimar sus objetivos políticos e ideológicos ante los ojos de sus militantes y de la sociedad a la que busca someter.

2.1. La explotación humana como método de financiación del terrorismo

Los registros y las evidencias recabadas sobre actividades terroristas relacionadas con la trata de personas demuestran, en primer lugar, que este negocio sirve como una fuente, en ocasiones crítica, de ingresos para los grupos armados.

A diferencia de los terroristas individuales o pequeños grupúsculos dispersos a lo largo y ancho de la geografía mundial, con necesidades económicas moderadas, las estructuras centrales y organizaciones satélites necesitan una extensa red financiera para asegurar su propia supervivencia, entrenar a sus tropas, preservar sus bastiones y centros de comando y desplegar una fuerte campaña de reclutamiento que desemboque en expansión territorial y dominio ideológico. Por ello, no es sorprendente que a menudo recurran al tráfico y contrabando de todo tipo de bienes, desde drogas, personas y armas hasta objetos, antigüedades, recursos naturales o petróleo, a fin de preservar su salud financiera.

En este escenario, el aprovechamiento de la explotación humana como método de financiación del terrorismo ha dejado de considerarse un fenómeno residual, registrando datos de su empleo en múltiples ocasiones. Desde 1990, se han documentado casos específicos de este fenómeno en organizaciones kurdas, chechenas, y otras situadas en el subcontinente indio, así como en diversos grupos separatistas, nacionalistas y guerrilleros, que recurren a la industria humana como una de sus fuentes preferentes de recaudación de fondos. Cuanto mayor sea la oportunidad, las capacidades y los beneficios potenciales, mayor es la posibilidad de implicación de los actores armados en actividades criminales.

Si ponemos el foco en grupos de carácter yihadista, vemos que desde la aparición y creciente presencia de las organizaciones de corte islamista en el mundo se han registrado investigaciones de redes en Oriente Medio y Europa responsables de involucrarse en estas actividades ilícitas y cuya participación les ha permitido obtener millones de euros en ganancias. Uno de los casos de principios de este siglo lo encarna la red de Ansar Al Islam establecida en Milán, responsable de proporcionar refugios, reclutar a voluntarios y recaudar millones de euros infiltrando a migrantes kurdos en Europa (Townsend y Mili, 2008).

Precisamente en Europa se han observado patrones de recaudación de fondos recurrentes por parte de las mafias que se dedican al contrabando operativas en el continente que sufre una de las mayores presiones migratorias del mundo. Se han documentado rutas que atraviesan India, Uzbekistán, Moscú, Ucrania, Eslovaquia, Austria, Italia y Bélgica, una hoja de tránsito que, en un contexto de conflictividad en Ucrania y mayor tensionamiento en otros territorios, ofrece múltiples oportunidades para avanzar y expandir este negocio criminal en el continente europeo.

LA RED GARSALLAOUI

La red Garsallaoui es un ejemplo de cómo las redes criminales pueden aprovechar diversas actividades ilícitas para financiar sus operaciones. En la primera década de los 2000, el contrabando de personas fue una pieza clave en su estrategia, permitiéndoles moverse entre Pakistán y Europa y establecer conexiones con Al Qaeda. Para ello utilizaron su experiencia en estas rutas, con el fin de expandir su negocio hacia el contrabando de inmigrantes ilegales hacia Europa.

La conexión entre Garsallaoui y Mohammed Akremi Gharsellaoui con el comando central de Al Qaeda en Pakistán puso de manifiesto cómo estas redes llegan a estar interconectadas, utilizando diferentes actividades criminales para complementarse entre sí. Desde el tráfico de drogas hasta el reclutamiento de islamistas, estas organizaciones aprovechan cualquier oportunidad para expandir su alcance e ingresos (Makarenko, 2012: 46).



Las organizaciones afiliadas a Al Qaeda y Estado Islámico imponen un gravamen sobre las rutas de tránsito de bienes y otras mercancías, incluidos los flujos migratorios. Aunque su presencia en territorios controlados por otros grupos criminales a menudo les impide monopolizar completamente el negocio migratorio, logran beneficiarse económicamente al controlar las rutas de tránsito y ofrecer protección durante el trayecto. Al mismo tiempo, conviene recordar que existen ciertos grupos terroristas que han emergido a partir de una base criminal previamente establecida, especialmente en África Occidental. Por ello, y a pesar de que varios elementos de estos grupos, asentados en el Sahel, han priorizado la infiltración y clandestinidad entre las muchas comunidades que habitan estas áreas, la colaboración con grupos criminales que comparten dialectos, historia y cultura ha sido preferente. Teniendo en cuenta que los traficantes de personas generalmente “reclutan” dentro de su propio grupo étnico y cultural, no es de extrañar que la práctica habitual en estas ocasiones sea mezclar roles, bandos, información, rutas y beneficios entre todos ellos.

En esta línea, conviene detenerse en lo relevante que es el afán recaudatorio que puede conseguirse con la trata de personas en comparación con otro tipo de actividades criminales. En el caso del contrabando de personas, el traficante hace negocios durante el trayecto desde el punto de origen hasta el punto final de su destino. Lo mismo ocurre con el tráfico de estupefacientes o recursos naturales, ya que son bienes de un solo uso que buscan reportar beneficios o ingresos únicamente durante el proceso de entrega de la mercancía, el canal de distribución, la información sobre el mercado y sus competidores o la venta al consumidor final, por citar algunos de los principales puntos de la cadena donde uno puede encontrar realmente lucro. En cambio, la trata de seres humanos proporciona múltiples beneficios simultáneos y sirven para ejercer muchas más funciones que cualquier otro recurso que pueda ser sujeto de compraventa, por lo que este aspecto de la explotación humana se convierte en uno de los mercados más interesantes y prometedores para multitud de actores. Esta “mercantilización” de la vida humana depende, así, del valor que el vendedor pretenda darle, por lo que es el criminal el que busca sacarle

el máximo rendimiento a su producto de venta, incluso si esto significa llegar a embarcarse en prácticas graves contra la dignidad humana³.

Uno de los casos de la implicación terrorista en el negocio de la trata de seres humanos más internacionalizados, por su capacidad de influir en individuos más allá del dominio local, es el secuestro a cambio de un rescate. Múltiples organizaciones terroristas, desde Estado Islámico y sus afiliados hasta Al Qaeda y sus ramas territoriales, han aprovechado y aprovechan esta táctica terrorista como modo de obtener grandes cantidades económicas. A pesar de que está prohibido el pago de rescates para liberar a los rehenes, se han dado a conocer algunos casos donde gobiernos internacionales han cedido a la presión terrorista para liberar a sus nacionales de su situación de cautiverio.

Por lo general, los secuestros en el Sahel Occidental están más enfocados en obtener contrapartidas económicas⁴, mientras que los grupos activos en el área del lago Chad los suelen utilizar con fines operativos⁵. En algunos puntos geográficos concretos como el norte de África esta práctica, especialmente hacia occidentales, ha sido una actividad muy rentable para un gran número de grupos salafistas.

A diferencia de los terroristas individuales o pequeños grupúsculos dispersos a lo largo y ancho de la geografía mundial, con necesidades económicas moderadas, las estructuras centrales y organizaciones satélites necesitan una extensa red financiera para asegurar su propia supervivencia

.....
3 En el caso de Estado Islámico, sus combatientes han llegado a forzar a sus víctimas a tomar anticonceptivos para evitar embarazos que les impidan revender a las mujeres esclavizadas (Kenny y Malik, 2019).

4 Fuentes de la Comisaría General de Información (CGI) consultadas por la autora, octubre 2023.

5 Si bien esta realidad está ampliamente documentada, el escenario de seguridad en África Occidental es tan cambiante que ambos conjuntos de motivaciones a menudo encuentran excepciones, de nuevo influidas por el contexto, la oportunidad y los recursos disponibles.

De todos los casos que se podrían mencionar, el secuestro de 32 turistas europeos a manos del Grupo Salafista para la Predicación y el Combate (GSPC) en febrero de 2003 destaca como uno de los principales incidentes que abrieron la veda a posteriores acciones similares del mismo grupo antes y después de su conversión a Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI). La suma del rescate, elevada por algunos informes en una cifra que osciló entre los cinco y diez millones de dólares, confirma la elevada rentabilidad a los combatientes de la organización (Forest, 2019: 6). Posteriormente, se estimaría que AQMI habría recaudado casi 90 millones de dólares en ingresos gracias al pago rescates únicamente en el periodo de 2003 a 2012 (CSS, 2013). Las motivaciones políticas detrás de estos actos jugaron un papel limitado, ya que las ganancias y el intercambio de condiciones (como la liberación de presos vinculados a AQMI o MUYAO) parecen encontrarse en el foco de la explicación (Lacher, 2012: 9). A pesar de que desde 2012 los secuestros de occidentales han disminuido considerablemente, las tendencias de 2022 apuntan a que este

descenso podría estar cambiando su trayectoria. De hecho, entre el 22% y el 44% de los ingresos anuales de JNIM en 2017 se nutrían de las cantidades abonadas en forma de rescates, tanto a nacionales como a individuos del exterior (Berger, 2023).

Al Qaeda y sus afiliados en África y Oriente Medio no son únicamente los grupos que se benefician de la práctica de los secuestros a cambio de un rescate como método financiero de su organización, ya que los registros sobre esta actividad a manos de Estado Islámico también se encuentran ampliamente documentados. Más adelante nos detendremos en el genocidio yazidí en Irak y Siria, por su elevada gravedad y perpetuidad en el tiempo. Sin embargo, de las ramas de Estado Islámico en el continente africano encontramos también evidencias significativas de estas prácticas. En la región de la cuenca del lago Chad, la franquicia de Estado Islámico en África Occidental (ISWAP) se disputa esta actividad criminal con Boko Haram, mientras que la de África Central (ISCAP) activó los secuestros como un mecanismo recurrente desde su proceso de integración y formación de la franquicia en 2019 (Weiss et al., 2023: 36).

Más allá del escenario africano se encuentran en circulación algunas investigaciones que apuntan a franquicias de Estado Islámico, como la operativa en el Khorasan (IS-K), como entidades capaces de generar importantes ingresos con la práctica de los secuestros y la extorsión (Departamento del Tesoro, 2024), acumulando las riquezas de una franquicia que actualmente ostenta la mayor capacidad de atentar sobre suelo europeo a escala global.

Además de la práctica de secuestros a cambio de un rescate, otra de las tácticas terroristas implicadas en actividades relacionadas con la trata de personas con fines financieros lo encontramos en la venta de órganos. Si bien es un tema que genera controversia y que no cuenta con una literatura extendida al respecto, sí se han contabilizado varios casos que evidencian que esta práctica ha sido también justificada desde las estructuras centrales de algunas organizaciones.

En 2015, las fuerzas especiales estadounidenses en Siria recuperaron una *fatwa* de Estado Islámico que justificaba la extracción de órganos de los “infieles”, justificando que “la vida y los órganos

del apóstata no tienen por qué ser respetados y pueden serle arrebatados impunemente” (Reuters, 2016). En entrevistas del Centro Internacional para el Estudio del Extremismo Violento (ICSVE) a desertores de Estado Islámico, se contó además con el relato del ex cirujano de la organización, que declaró haber extirpado riñones y córneas a los prisioneros bajo la justificación de que “los yihadistas merecían más órganos”. Un combatiente afirmó también haber sido impedido de matar a esclavos porque fue informado de que la organización necesitaba “usar sus cuerpos para ganar dinero” (CTED, 2021: 37). En febrero de 2015, el embajador iraquí Mohamed Alhakim hizo una petición al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para investigar la muerte de doce médicos en Mosul que, según afirmaba, habían sido asesinados por combatientes de Estado Islámico tras negarse a extraer órganos de cadáveres, algunos de los cuales se encontraban mutilados por una abertura en la espalda donde se encontraban los riñones (Beqiri, Maluku y Maluku, 2023).

Posteriores análisis sugieren que la mayoría de riñones y otros órganos vendidos en el mercado negro procedían de refugiados de origen sirio, sudanés, somalí y eritreo que se encontraban en campamentos sirios y que cruzaron a Líbano desde asentamientos temporales controlados por la entonces filial de Al Qaeda Frente Al Nusra y sus asociados (CTED, 2021: 38). Por tanto, el tráfico y la venta de órganos pueden constituir una parte moderada pero aun así significativa de la financiación de una causa mayor de la organización, abarcando prácticamente todas las posibilidades de la trata de seres humanos en sus planes financieros estratégicos.

2.2. La explotación humana como método operativo del terrorismo

Además de involucrarse en actividades relacionadas con la explotación humana con fines económicos, el terrorismo emplea este negocio como modo de avanzar unos objetivos de carácter operativo. No es ninguna novedad que las organizaciones terroristas buscan legitimación en sus actos para contestar el poder del régimen a fin de poder derrocarlo

mediante el apoyo popular (Paul, Clarke y Grill, 2010), por lo que este fin último a menudo justifica el empleo de dudosos métodos de adquisición de fondos y consecución de estrategias (Avdan y Omelicheva, 2021: 5).

Un ejemplo de lo anterior lo encontramos en Hezbollah, que emitió una *fatwa* a mediados de los años 80 justificando desde el punto de vista religioso la distribución y el tráfico de drogas (Hernández, 2013). Por su parte, Estado Islámico no ha dudado en hacer lo propio a través de la revista *Dabiq* con la esclavitud y violencia sexual, defendiendo que son prácticas que pueden ocurrir en connivencia con los postulados ideológicos islámicos que persigue su causa (Malik, 2017). Además de estos dos, no son pocos los grupos terroristas que defienden, simpatizan e incluso alientan la comisión de actos que a priori podrían considerarse impuros o que contravienen su doctrina fundamentalista. Esta justificación ocurre cuando se analizan las motivaciones detrás del tráfico y el contrabando de personas, aunque no son los únicos ámbitos criminales que caen en el mismo saco; el negocio de la droga

está fundamentado sobre la misma base moral en la que se incluiría el negocio humano (Aguilera, 2022: 21).

En las siguientes subsecciones desglosaremos los principales objetivos con los que se busca justificar la participación terrorista en la explotación de seres humanos como método operativo. Para ello, se han identificado cuatro áreas⁶ en las que categorizar el fundamento justificativo de los grupos terroristas: el empleo de la explotación humana como táctica 1) de guerra; 2) de reclutamiento; 3) identitaria y 4) de movilidad.

2.2.1. Empleo como táctica de guerra

El uso de la explotación humana como táctica de guerra es un método extendido que se centra en aterrorizar y desestabilizar comunidades, minando la confianza en el gobierno y generando un clima de miedo y desconfianza en la sociedad (Crawford, 2017). Esto les permite, en última instancia, sembrar el terror y alcanzar sus objetivos.

La violación y otras formas de violencia sexual fueron reconocidas en

la Resolución 1820 (2008) del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas como “crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad o actos constitutivos con respecto al genocidio”, señalando que “las mujeres y las niñas son especialmente objeto de actos de violencia sexual, incluso como táctica de guerra destinada a humillar, dominar, atemorizar, dispersar o reasentar por la fuerza a miembros civiles de una comunidad o grupo étnico, y que la violencia sexual utilizada de esta manera puede en algunos casos persistir después de la cesación de las hostilidades” (CSNU, 2008).

Esta táctica se continúa empleando en muchas zonas del mundo, desde Nigeria con Boko Haram y su violencia intimidatoria y sexual contra las comunidades hasta Al Shabaab en Somalia con la trata de personas como método de aterrorizar a los civiles y desafiar a las estructuras del Estado (Avdan y Omelicheva, 2021: 6). Estos también emplean la depredación de carácter sexual como modo de reforzar los lazos entre sus combatientes y generar una sensación de poder entre quienes cometen actos violentos (Malik, 2017).

.....
⁶ Estos ámbitos no son excluyentes. De hecho, las evidencias apuntan a que es probable que la trata de seres humanos y el contrabando tengan cabida en dos o más ámbitos simultáneos.

Así, vemos cómo la trata de personas se ha convertido en una táctica oportunista para difundir el terror y someter a la población. El Informe de 2018 del Secretario General sobre Violencia Sexual Relacionada con Conflictos hacía mención al asalto sexual precisamente como arma de guerra y una gran fuente de beneficios, tanto por actores estatales como por grupos armados no estatales.

De modo similar, los embarazos, matrimonios y conversiones forzadas son parte del modus operandi de aquellas organizaciones que buscan subyugar a una población determinada, asegurándose de que se expande la ideología y un número de futuros combatientes a la causa (Kenny y Malik, 2019).

Si en un escenario optimista estas personas fueran liberadas, el camino tampoco resulta nada sencillo. Su condición de víctimas sexuales también tiene el efecto de convertirlas a posteriori en marginadas, rompiendo los lazos familiares a través de la vergüenza y el estigma. Así lo informaba en 2017 el Secretario General (CSNU, 2017a: 4),

por lo que estos colectivos, vulnerables y desplazados, pueden no tener en muchas ocasiones la opción de regresar a sus comunidades o abandonar a los individuos que tanto daño les han causado.

2.2.2. Empleo como táctica de reclutamiento

Además de ser una táctica de guerra, las organizaciones terroristas utilizan a las víctimas de trata y explotación sexual como un medio para mantener la disciplina entre sus miembros y como incentivo para reclutar y retener a nuevos combatientes. Esta práctica se basa en ofrecer a aquellos interesados en unirse la posibilidad de contar con personas esclavizadas como sirvientes o cónyuges, lo cual se convierte en una estrategia tanto para aumentar su base de soldados como para recompensar a los miembros que obtienen más éxitos en sus operaciones (Cohen, 2013). Otra opción es emplear a estos esclavos como castigo hacia grupos rivales y comunidades que cooperan con el rival o son insumisas, una práctica frecuente en la zona de la triple frontera entre Mali, Burkina Faso y Níger, donde operan la

franquicia de Al Qaeda (JNIM) y Estado Islámico (El-Sahel).

La cuestión de los niños soldado es aún más delicada. Este tipo de reclutamiento es común tanto en organizaciones terroristas como en otros grupos armados y fuerzas gubernamentales⁷. La aparición de niños combatientes en la República Democrática del Congo repitiendo el lema de “permaneciendo y expandiéndose” de Estado Islámico, retransmitido en un video de las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF) en julio de 2020, obliga a poner el foco en el uso de menores en la lucha armada, desde soldados en primera línea hasta el uso de niños como arma suicida⁸. Esto último genera una exposición global del mensaje, mayor atención mediática y un impacto más profundo que el que puede producirse con la violencia terrorista protagonizada por hombres, ejerciendo todavía más presión sobre los gobiernos y buscando forzar una respuesta (Avdan y Omelicheva, 2021: 7).

Los niños pueden ser empleados en diferentes roles, como soldados, mensajeros, cocineros, vigilantes o esclavos sexuales, sin necesidad de que estos proporcionen un consentimiento explícito. Esto es particularmente interesante para las organizaciones terroristas, ya que la trata de personas contra adultos suele requerir medios coercitivos como amenazas, secuestros o engaños para obtener el consentimiento de la víctima. En el caso de los niños, este elemento no necesariamente resulta imprescindible, ya que solo les basta con el consentimiento, sometimiento o engaño de los familiares. Cuando la trata de seres humanos se emplea como táctica de reclutamiento, las alianzas entre grupos criminales y organizaciones terroristas se convierten en mutuamente beneficiosas para ambos, llegando el segundo a nutrirse del mismo grupo de reclutas a cambio de ofrecer paso seguro al primero.

7
La Sección 402 de la Ley de Prevención de Niños Soldados (CSPA) estadounidense incluye una lista de gobiernos extranjeros cuyas fuerzas armadas gubernamentales, policía u otras fuerzas de seguridad, o grupos armados apoyados por el gobierno, reclutan o utilizan niños soldados. Entre 2022 y 2023, países como Somalia, Libia, Siria, República Democrática del Congo, Mali, Egipto y Yemen están incluidos en esta lista.

8 Fuentes de la Comisaría General de Información (CGI) consultadas por la autora, octubre 2023.

2.2.3. Empleo como táctica identitaria

El uso de la explotación humana como táctica de coerción e intimidación es particularmente evidente para perseguir campañas que no solo buscan atemorizar a comunidades sino también ir un paso más allá: proceder a la erradicación de una identidad o cultura. A menudo, se han servido de esta táctica para conseguir una “limpieza” de zonas de su interés donde conviven colectivos minoritarios de carácter étnico o identitario.

El mejor ejemplo de ello lo ilustra Estado Islámico con la comunidad yazidí. Una de las fechas más señaladas tuvo lugar el 4 de agosto de 2014, cuando combatientes de la organización invadieron cientos de pueblos y aldeas, asesinando y capturando a miles de yazidíes para, en última instancia, perseguir y destruir a toda una comunidad (CTED, 2021: 22). Los yazidíes han sido tradicionalmente blanco directo de la violencia de Estado Islámico, que ha buscado desde sus inicios echar por tierra sus costumbres, tradiciones y lugares de culto para asegurarse de que no puedan reivindicar su carácter identitario en el futuro.

Si ponemos el foco en Pakistán, vemos cómo Estado Islámico persigue una estrategia similar con la comunidad hazara. En 2021, 11 mineros hazaras fueron secuestrados y brutalmente asesinados en Mach (Baluchistán) a manos de la rama de IS-K. Una investigación reciente señala además que los hazara paquistaníes han sido blanco de limpiezas étnicas sistemáticas por parte de los grupos salafistas (Khan, n.d.). La Comisión de Derechos Humanos de Pakistán (HRCP) ha llegado a documentar casi 3.000 registros de hazaras asesinados en ataques individuales, actos suicidas y atentados con coche bomba en los últimos 20 años, una persecución muy vívida en el vecino afgano a manos de los talibán.

Estos casos muestran que la explotación humana y la violencia no solo buscan generar terror, sino también borrar identidades minoritarias y culturas enteras. Las tácticas utilizadas, como las masacres y los secuestros, no solo tienen el propósito de intimidar, sino de eliminar cualquier rastro del pasado que pueda contravenir con la narrativa que los grupos terroristas desean introducir.

2.2.4. Empleo como táctica de movilidad

Tras sacar a la luz diversos ejemplos que muestran una *hibridación* de los fenómenos del terrorismo y el crimen organizado, es conveniente destacar que una de las principales ventajas que tienen al asociarse es la cobertura que ambos actores pueden proporcionarse entre sí, especialmente en lo concerniente a la movilidad.

Los individuos terroristas con necesidad de desplazarse entre territorios y países a menudo dependen de redes criminales involucradas en la trata de personas y el contrabando de migrantes para facilitar su movimiento clandestino. Estas redes tienen experiencia en eludir controles fronterizos y proporcionar los recursos necesarios para el desplazamiento (documentación falsa, contactos dentro de las aduanas o en el lugar de destino, etc.), lo que puede resultar muy útil para los terroristas que intentan infiltrarse en áreas donde se enfrentan a mayores barreras de seguridad.

Las alianzas también abren nuevos espacios de oportunidad al facilitar operaciones transfronterizas y la cooperación con grupos afines en otros lugares. Un informe de 2024 de la agencia de Naciones Unidas para la Droga y el Delito (UNODC) apunta precisamente a la colaboración entre los dos sectores criminales, que se entrelazan en un entorno cooperativo donde el terrorismo y el crimen organizado se retroalimentan (UNODC, 2024: 20).

En este contexto, la proliferación del contrabando de personas y la trata son a menudo generalizados a consecuencia de la violencia ejercida por parte de organizaciones terroristas, que desemboca en desplazamientos forzados. Esta táctica les proporciona grandes ganancias al cobrar a los traficantes y contrabandistas por cruzar su territorio, no necesitando así involucrarse activamente en el negocio humano. En mayo de 2015, Estado Islámico recurrió a esta práctica de gravamen de impuestos a grupos que ayudaban en el traslado de migrantes desde Oriente Medio y el norte de África hacia Europa, mientras que algunas fuentes apuntan que los ataques a los campos de refugiados en el oeste de Siria durante este periodo tenían como objetivo precisamente incrementar el flujo de personas en las áreas controladas

por el grupo, a fin de maximizar el carácter recaudatorio de la transacción. En el cuerno de África, Estado Islámico ha dependido de redes de contrabando para transportar a sus combatientes desde Yemen hacia Somalilandia, mientras que en Mozambique, el grupo es conocido por sus actividades de reclutamiento de niños para combatir y de niñas para servir como esclavas sexuales (Jespersion, Ochieng y Burudi, 2022: 9).

En Mali, el entramado criminal se vuelve complejo debido a la presencia de varios grupos armados, tanto de carácter yihadista como rebeldes, y redes criminales que se aprovechan de la vulnerabilidad de los migrantes. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Grupo de Expertos de Naciones Unidas en Mali han tratado de documentar casos donde los contrabandistas realizan este tipo de colaboraciones con los grupos armados sobre el terreno, revelando cómo contrabandistas de migrantes como Baye Coulibaly proporcionan migrantes al Grupo de Autodefensa Tuareg Imghad y Aliados (GATIA) y reclutas para JNIM, haciendo que el negocio de la trata de

seres humanos sea vicioso y crónico en toda la región que abarca territorios de Mali, Argelia, Libia, Níger y Mauritania.

3. FACTORES QUE FOMENTAN LA EXPLOTACIÓN HUMANA EN ÁFRICA Y ORIENTE MEDIO

Cuando buscamos conexiones entre la actividad criminal y las entidades terroristas, existen una serie de factores comunes que pueden observarse en diversos grados tanto en los ejemplos discutidos anteriormente como en los casos de estudio de la siguiente sección. Tal y como se expone desde la Dirección Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo de Naciones Unidas (CTED), existen algunos indicadores clave entre los que se incluyen 1) la porosidad fronteriza y el control estatal débil; 2) la fragilidad institucional, fomentada por un largo historial de prácticas corruptas y una clara ausencia de gobernanza política; 3) elementos económicos clave como el subdesarrollo y los índices de pobreza y 4) el contexto de estabilidad, especialmente en escenarios de conflicto armado.

Los anteriores factores están conectados entre sí, y en muchos casos el aumento de una fuerza el ascenso o descenso de otro y viceversa, por lo que la relación entre el terrorismo y el crimen organizado debe entenderse en un contexto de múltiples índices económicos, políticos, sociales y de seguridad operando simultáneamente y con una elevada capacidad de impactar en las dinámicas de la economía ilícita.

3.1. Fronteras porosas y escasamente controladas

La porosidad de las fronteras es un factor crítico en aquellos escenarios donde la presencia terrorista desafía directamente al aparato estatal por el control de sus áreas criminales de interés. En la mayor parte de los casos, el propósito principal se centra precisamente en controlar estos mercados ilícitos.

Cuando las rutas de migración atraviesan zonas con presencia terrorista, los grupos violentos suelen sacar provecho de la situación, especialmente facilitando rutas de paso, zonas seguras y protección a contrabandistas y otros criminales ligados a la trata

de personas. A excepción del caso del Estado Islámico en Siria e Irak, donde el grupo actuaba como una organización criminal independiente, el terrorismo obtiene ingresos gravando impuestos a los contrabandistas que operan en estas rutas o extorsionando a migrantes y traficantes para permitirles el paso seguro. Incluso aunque el terrorismo no sea directamente responsable de la trata de personas, vemos cómo suele aprovechar la débil gestión y control fronterizo de los que se beneficia este mercado.

En regiones más próximas a la frontera sur de Europa, la proliferación de negocios ilícitos en el norte de África es un asunto de primer orden, menos jerarquizado y más asentado desde que el colapso de Libia en 2011 facilitara la expansión de esta forma lucrativa como modo de vida de grupos armados, individuos del crimen y, posteriormente, combatientes terroristas. La permeabilidad de las fronteras en países como Argelia, Mali, Níger, Mauritania y Libia ha permitido que desde entonces grupos armados y criminales contrabandeen con armas, drogas y combustible a través de la

mayor parte de África Occidental. Esta economía ilegal también se ha integrado en el tráfico de personas, gracias a la escasa vigilancia transfronteriza, lo que facilita el transporte de migrantes con diversos fines.

En el caso del contrabando de migrantes, los grupos operativos tanto en el este como en el oeste de Libia introducen a sus víctimas dependiendo de la ruta preferente de procedencia, desde el flanco sur si los migrantes provienen de los países de África Occidental o desde la frontera con Egipto y Sudán si éstos provienen de Oriente Medio o África Oriental (CTED, 2021: 19). Una vez llegados a Libia, los migrantes, ya sean en calidad de refugiados o solicitantes de asilo, suelen ser detenidos y coaccionados para trabajar como medio para obtener su liberación o continuar su viaje. Durante su cautiverio, se les somete a abusos físicos y sexuales de todo tipo, y los contrabandistas, traficantes y demás redes criminales llegan incluso a extorsionar a sus familiares en los países de origen para conseguir sacar más rendimiento del rehén (CTED, 2021: 20).

La relación individual entre grupos criminales y organizaciones terroristas en varios focos de estudio es amplia. Sus actividades se entrelazan, cooperan y se sostienen gracias a la red de contactos con personalidades claves en ambos bandos, lo que facilita el flujo de personas a través de diferentes regiones y convierte al terrorismo en cómplice de la criminalidad operativa transfronteriza.

3.2. Fragilidad institucional, corrupción y ausencia de gobernanza política

La falta de estabilidad política, la deficiencia en la gobernanza y la corrupción generalizada proporcionan un entorno propicio para la proliferación de la trata de seres humanos y la actividad terrorista. Al examinar el índice de Percepción de la Corrupción que lanza anualmente Transparencia Internacional (2023), se confirma que los países que componen los territorios mayormente golpeados por la actividad del extremismo violento son a su vez las naciones que cuentan con peores datos relacionados con la corrupción dentro del aparato del estado y la degradación

de unos servicios públicos supuestamente garantes de la transparencia institucional y el orden social. Libia se sitúa en una puntuación de 18 sobre 100 en torno a la impunidad de la corrupción, siendo 0 el indicador de “altamente corrupto” y 100 el indicador de ausencia de corrupción. Mali (28/100), Níger (32/100) y Burkina Faso (41/100) barajan índices también alarmantes en términos comparativos, al igual que Siria (13/100) e Iraq (23/100) si trasladamos el foco a los índices de corrupción en Oriente Medio.

Estos datos no son altruistas: responden a una realidad en la que cuanto mayor son los indicadores de corrupción y déficit en la gobernanza, mayores son las oportunidades de inversión en mercados de la economía criminal y prácticas continuadas de un crimen organizado en fase consolidada. En el caso de Mali, la incapacidad del gobierno para ejercer un control eficaz y brindar servicios básicos ha generado un vacío de poder e inestabilidad prolongada en ciertas zonas del norte, permitiendo así una prosperidad de grupos delictivos organizados difícil de disolver. La falta de liderazgo y

corrupción política del gobierno de Bámako en el norte, manifestada hasta hace escasos meses, ha fomentado una economía informal basada en actividades ilegales donde se incluyen el contrabando de armas, drogas y también seres humanos, así como la explotación de recursos naturales y la instrumentalización criminal de ciertos cargos políticos con redes de patronazgo en el seno del estado (Caparini, 2022: 28). Esta corrupción entre las autoridades estatales ha debilitado aún más si cabe la capacidad y voluntad gubernamental de erradicar el crimen organizado en todo el país, abocando a Mali a una crisis política, económica y securitaria sin precedentes. La rivalidad entre las fuerzas gubernamentales y los grupos armados por el control de las rutas de tráfico ha intensificado las tensiones y la violencia ya existente en una nación colapsada por la amenaza terrorista en los cuatro puntos cardinales de su territorio.

Los elementos relacionados con la gobernabilidad democrática y los indicadores criminales actúan como impulsores no solo de la migración irregular sino también de las redes criminales que han encontrado en la trata de seres humanos una fuente incesante de beneficios económicos, generando una oleada de descontento y frustración social que ha propiciado incluso el apoyo a ciertos grupos terroristas con una marcada vocación política en su estrategia de expansión. Al mismo tiempo, otros aspectos relacionados con la crisis institucional dejan entrever un panorama de falta de armonía en el entorno judicial, en tanto la falta de legislación conjunta actúa como facilitador de la impunidad o sentencias insuficientes que agravan todavía más la confianza social en las instituciones judiciales como método de resolución de conflictos.

Así, vemos cómo los índices de gobernabilidad y las dinámicas corruptivas en el seno del sistema político y de justicia son factores clave en la configuración y consolidación del crimen organizado, una industria de la que se benefician tanto figuras públicas como

grupos rebeldes, líderes comunitarios y organizaciones terroristas.

3.3. Subdesarrollo y pobreza

Además de la porosidad fronteriza y los bajos índices de gobernabilidad, el subdesarrollo y la pobreza son factores fundamentales que a menudo impulsan la explotación humana en África y Oriente Medio. Estas áreas suelen experimentar bajos niveles de desarrollo humano y económico, lo que crea entornos más fértiles para actividades delictivas y nuevas formas de violencia sistémica.

En primer lugar, la falta de oportunidades económicas actúa como catalizador social en la búsqueda de medios desesperados de supervivencia. La falta de empleo y la escasez de recursos deja, en algunas ocasiones, a las personas vulnerables a la industria del crimen organizado. En otras, las hace víctimas de la explotación, ya sea con actos de trabajo forzoso, explotación sexual u objeto de reclutamiento terrorista bajo promesas de ingresos y estabilidad. Si echamos un rápido vistazo a algunos de los indicadores clave como el índice de desarrollo humano, observamos cómo Burkina Faso, Mali, Níger o Nigeria son algunos de los países que contarían con un “bajo desarrollo” según el estudio

más reciente al respecto (UNDP, 2024). En términos económicos, el crecimiento del PIB per cápita maliense, burkinés y nigeriano se desarrolla por debajo del umbral del resto de su región, mientras que el porcentaje de inflación anual de los tres se sitúa por encima de la media regional, según datos del Banco Mundial (n.d.).

La falta de acceso a educación de calidad y servicios básicos de salud también perpetúa el ciclo de pobreza y vulnerabilidad. Analizando el mismo conjunto de países, vemos cómo las cuatro naciones de África Occidental cuentan con un porcentaje menor de tasa de alfabetización que sus homólogos de la región, mientras que el porcentaje de mujeres jóvenes (15-24), también se encuentra bastante por debajo de la media regional de África Subsahariana, al menos en los datos en los que se tienen registros oficiales⁹. Por pura necesidad, las personas que viven en la pobreza extrema son las más propensas a caer en manos de traficantes que prometen oportunidades de trabajo o una vida mejor en el extranjero, solo para ser explotadas una vez llegan a su

destino. Si atendemos a estos niveles de pobreza, vemos cómo más del 50% de la población en Níger y más de un tercio de la población en Burkina Faso y Nigeria entraban dentro de esta categoría en 2018¹⁰.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que el segmento más pobre de la población no constituye necesariamente una parte significativa de los flujos de migración irregular. De hecho, a medida que aumenta el producto interno bruto (PIB) per cápita, indicando un mayor desarrollo económico, también suele haber un aumento en la migración irregular, lo que significa que las personas adquieren más recursos y un deseo de movilidad, buscando oportunidades económicas y una mejor calidad de vida en otros lugares (CTED, 2021: 54).

9 Desde 2014, Mali únicamente ha aportado datos en tres ocasiones, la última en 2020. Nigeria solo lo ha hecho en 2018 y Níger en 2022.

10 Año del último dato aportado por los tres al Banco Mundial.

Con frecuencia, la falta de desarrollo económico, la baja tasa de alfabetización o la desigualdad son factores importantes de vulnerabilidad que impactan negativamente en las comunidades hasta el punto de exponerlas a varios tipos de explotación. Entre estos se encuentran las prácticas que podrían considerarse como esclavitud humana. En esta línea, volvemos al último Índice Global de la Esclavitud (2023), que confirma que en varios de los países de África Occidental y Oriente Medio se dan las condiciones para el desarrollo de varias formas de esclavitud moderna, incluyendo prácticas de trabajo forzoso, el uso de niños en conflictos armados o los matrimonios forzados a edades muy tempranas.

3.4. Conflictos armados

En situaciones de conflicto armado, la vulnerabilidad de las personas y la posibilidad de verse envueltas en redes de tráfico y contrabando humano aumentan sustancialmente y tienden a ser más prevalentes y problemáticas.

Según se apunta desde el Programa de Datos de Conflictos de Uppsala, el número de conflictos armados lleva aumentando durante más

de una década. En 2020, tuvieron lugar 56 conflictos donde los actores estatales se enfrentaban a grupos armados de carácter no estatal, la cifra más alta desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Más de la mitad de los conflictos (30) se registraron en África. En líneas similares, el número de actores involucrados en los conflictos armados también ha sufrido un aumento considerable. En 2018, solo un tercio de los conflictos tenía lugar entre dos partes, mientras que casi la mitad de ellos implicaba de tres a nueve partes y casi una cuarta parte del total involucraba a diez o más actores diferentes. Incluso en algunos casos, como Libia y Siria, las facciones no estatales se cuentan por cientos y los grupos descentralizados y micro-grupos se entrelazan en forma de alianzas fluidas que tan pronto pueden fraccionarse como fusionarse (Caparini, 2022: 3).

Con este telón de fondo, la investigadora Nadine Liv identifica dos perfiles principales de traficantes en las áreas afectadas por los conflictos. Por un lado, encontramos a los traficantes oportunistas, grupos criminales o individuos que, motivados por fines

económicos, ven a la industria de la trata de personas como una oportunidad rentable en una zona devastada por el caos provocado por el conflicto armado. En esta categoría entrarían, por ejemplo, las tribus nómadas en el norte de África y la región del Sahel, involucradas históricamente en actividades del crimen organizado como fuerte vector económico, o situaciones de oportunidad como la caída de Gadafi en Libia y el colapso del país en 2011, dejando un vacío gubernamental que abrió entornos todavía más permisibles para las operaciones del crimen organizado, convirtiéndose en importantes rutas de tráfico hacia Europa (Liv, 2019: 24). En este escenario influyen sustancialmente las redes criminales preexistentes de contrabando y tráfico de bienes ilícitos, ya que también sirven como corredores de contrabando o aumentan las posibilidades de presencia de industrias dedicadas a la trata de seres humanos. De hecho, las evidencias apuntan a que precisamente las organizaciones involucradas en el movimiento de bienes ilícitos tienden a aumentar una prevalencia del negocio de la trata (CTED,

2021: 54). Si a esto le añadimos que las motivaciones terroristas para expandir un territorio suelen contar con una base de justificación económica, vemos cómo la problemática se extiende todavía más. De hecho, no es casualidad que las rutas migratorias preestablecidas en África Occidental coincidan con áreas donde las organizaciones terroristas tienen control o influencia sobre el territorio. Esta es una realidad evidente para cualquier persona que viva en Burkina Faso, Níger y Mali, lo cual representa un riesgo enorme para los migrantes, que pueden encontrarse en el epicentro de los conflictos de camino a una vida mejor o incluso caer víctimas de los intereses y objetivos del terrorismo en la zona.

En Siria, Irak y Afganistán, la violencia también está contribuyendo a la migración hacia Turquía y Europa. Un informe del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) expone cómo los conflictos internos y la inestabilidad en estos países empujan una migración que está generando grandes ingresos para las organizaciones terroristas que operan allí, ya sea a través de actividades ilegales o extorsión a los migrantes. Las

actividades de contrabando de migrantes en algunas ocasiones se producen precisamente bajo el control de las agrupaciones terroristas en colaboración con las redes criminales creadas en regiones cercanas a las fronteras con países de tránsito (GAFI, 2022: 27).

Como ocurre con el caso del tráfico y contrabando de armas, el estallido de conflictos violentos aumenta la necesidad de transferir o desviar clandestinamente material que no necesariamente sigue unos cauces legales (Aguilera, 2023b: 22). Lo mismo ocurre en el caso de la industria de la explotación humana, ya que diversos factores, como la inestabilidad generalizada, la inseguridad y la desesperación económica derivados de la acción violenta, fomentan su aparición. La falta de un Estado de derecho efectivo y la necesidad de proteger su propia seguridad son los dos elementos fundamentales que explican la necesidad de muchas personas de huir de sus hogares en tiempos de conflicto, convirtiéndose en blancos fáciles para los traficantes. La población local, despojada de protección legal y enfrentándose a condiciones desesperadas, se vuelve todavía más vulnerable a la explotación

por parte de unos traficantes que ofrecen falsas promesas de una vida mejor.

También es posible encontrar un escenario de conflicto donde los civiles deciden quedarse en sus hogares, lo cual puede ser particularmente peligroso en momentos de presencia terrorista en sus comunidades. En este caso, el control de los grupos terroristas sobre la comunidad local tiene, como hemos visto anteriormente, muchas opciones atractivas para involucrarse en la industria de la explotación de civiles, bien sea su objetivo final financiero u operativo. Boko Haram en Nigeria y Al Shabaab en Somalia son un buen ejemplo de ello. Dejando a un lado su objetivo político último de derrocar al régimen establecido, estas organizaciones mantienen un largo historial de secuestros a mujeres y niñas para diversos fines (entre los que se incluyen fines de esclavitud sexual o trabajos forzosos), aprovechando la vulnerabilidad de la población local durante los conflictos armados y el caos y la violencia derivados de sus propias acciones. La explotación humana, incluida la trata de personas, se convierte así en una herramienta más en el abanico de opciones de estos grupos (Liv, 2019: 25).

4. DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA: CASOS DE ESTUDIO

Múltiples grupos yihadistas están acusados en mayor o menor medida de formar parte del entramado de las economías ilícitas dedicadas a la trata y el contrabando de personas. Como hemos observado en anteriores secciones, el vínculo entre el terrorismo y las actividades ilícitas de explotación humana puede adoptar un amplio abanico de manifestaciones y motivaciones, incluyendo objetivos económicos, haciendo que las organizaciones se inclinen por actividades de facilitación del contrabando de migrantes a través de las rutas bajo su control, el uso de niños sin hogar para recaudar fondos, los secuestros a cambio de rescates o incluso participar en el negocio de la venta de órganos. La explotación humana también puede estar relacionada con actividades operativas de reclutamiento, coerción, intimidación o movilidad, objetivos a menudo dirigidos a reforzar la moral de sus combatientes, satisfacer sus necesidades o invertir en mano de obra que realice el trabajo que los miembros de la organización no tienen voluntad o posibilidad de ejercer.

Las motivaciones detrás del negocio de la explotación humana son varias, como así son los objetivos, por lo que cada grupo termina por ejercer su control en estas actividades atendiendo a criterios de capacidad, objetivo y oportunidad. Si se atiende a aquellas agrupaciones que han tenido un carácter transfronterizo y una capacidad suficiente para perpetrar un daño considerable a un determinado conjunto de países, los resultados de esta investigación apuntan a tres organizaciones como las protagonistas de un historial evidente y continuado de vínculos con el negocio ilícito de la explotación humana: Estado Islámico (y sus ramas territoriales), Al Qaeda (y sus ramas territoriales) y Boko Haram.

4.1. Estado Islámico en Irak y Siria

La trata de personas no es una práctica limitada a un conjunto de países determinados sino que ocurre, en mayor o menor medida, en todo el mundo. Entre los factores más conocidos que incrementan la trata están los conflictos armados, el desplazamiento a causa de la violencia, el subdesarrollo económico o los índices de pobreza, factores que han sido comunes en muchos países de Oriente Medio en los últimos años.

Si nos centramos en el aprovechamiento de esta industria criminal por parte del terrorismo, vemos cómo las prácticas más contemporáneas de esclavitud llevadas a cabo por Estado Islámico en Irak y Siria, especialmente contra la comunidad yazidí son, sin duda, los casos más documentados de la participación terrorista en actividades del crimen organizado como método de recaudación de fondos y apoyo a sus actividades operativas.

Como se ha señalado en anteriores secciones, la explotación humana es una industria criminal que sirve a más de un propósito, al contrario que otros mercados como las drogas, el

comercio de antigüedades o el petróleo, que no dejan de ser bienes de un solo uso. Esta es una conclusión que entre las filas de Estado Islámico se encajó a la perfección, por lo que las funciones de las personas explotadas han terminado siendo múltiples: desde esclavas sexuales realizando tareas domésticas o siendo vendidas a individuos simpatizantes, locales o a contrabandistas, hasta personas sometidas a trabajos forzosos finalmente siendo trasladadas como mano de obra explotable para otros grupos armados y organizaciones criminales. Todo esto con el objetivo de incentivar la colaboración entre grupos, el reclutamiento y el mantenimiento de su flujo financiero de impuestos a la mercancía transitada, engrosando las arcas de la organización cuyas finanzas en 2014 llegaron a ascender hasta los casi dos mil millones de dólares (Levallois, Cousseran y Kerrello, 2017: 14).

La comunidad yazidí, ubicada principalmente en las regiones de Shaykhan y Sinjar del norte de Irak, ha sido objeto de persecución sistemática por parte de numerosos actores, más especialmente durante el control

territorial y comunitario de Estado Islámico entre 2014 y 2019. En agosto de 2014, desafiando el poder de las fuerzas Peshmerga que controlaban Sinjar, perteneciente a la región del Kurdistán iraquí, Estado Islámico forzó su retirada para asentarse en la zona, dejando a la comunidad entera -mayoritariamente compuesta de yazidíes- a merced de sus combatientes (Ruíz, 2024: 7). Desde este momento se inició un genocidio que pasará a la historia por su especial crudeza y brutalidad, destacando la explotación sistemática de toda la comunidad como una de sus características más distintivas.

Una de las principales explicaciones de la participación de Estado Islámico en la explotación humana de la comunidad yazidí estuvo fundamentada en la motivación económica. En el caso del contrabando de migrantes, se tiene constancia de una generación de ingresos significativa únicamente con la imposición de impuestos en el traslado de éstos desde Oriente Medio y el norte de África hasta

Europa, fomentando incluso este negocio con sus actuaciones¹¹. La explotación humana también pasaba por la práctica de unos secuestros que se saldaban con cuantiosas sumas recaudatorias: el grupo llegó a devolver a algunas mujeres y niñas yazidíes a sus familias a cambio de un rescate, ingresando, únicamente con esta práctica, entre 35 y 45 millones de dólares en 2014 (Jespersion, Ochieng y Burudi, 2022: 7).

En esta transacción se solía incluir a intermediarios entre las familias y la organización para el intercambio del rehén y el dinero. Estos intermediarios a menudo terminaban siendo los propios contrabandistas, incorporando abiertamente a miembros del crimen organizado como un elemento recaudatorio adicional en la ecuación¹².

.....
11 Las evidencias apuntan a que Estado Islámico atacaba campamentos de refugiados en el oeste de Siria con el propósito de acelerar el flujo de migración hacia espacios más seguros, engrosando las arcas de los contrabandistas que, a la postre, aumentaría la recaudación terrorista.

12 Un ejemplo de ello lo encontramos en Hoda Alias y sus tres hijos, quienes fueron secuestrados y esclavizados por miembros de Estado Islámico durante la masacre de Sinjar en 2014. Fueron liberados en noviembre de 2015 tras pagar una suma de dinero al grupo a través de un intermediario en Gaziantep. Fuente: CTED, 2021.

La venta sistemática de yazidíes, especialmente mujeres y niñas, es el ejemplo más significativo conocido del uso de la esclavitud sexual como método recaudatorio de fondos. Las investigaciones sobre la explotación sexual de la Dirección Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo de Naciones Unidas (CTED) resumían el entramado criminal de la siguiente forma:

Después del ataque al Monte Sinjar en agosto de 2014, Estado Islámico trasladó por la fuerza a mujeres y niñas cautivas a sitios de retención en Irak y Siria. El 80% de estas personas se pusieron a disposición de los combatientes para su compra individual, mientras que el resto se consideraba propiedad colectiva de EI y se distribuía en grupos a bases militares en Irak y Siria (Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, 2016: 12 citado en CTED, 2021). En algunos casos, EI permitía a sus combatientes comprar grupos de mujeres yazidíes para llevarlas a áreas rurales sin mercados de esclavos y venderlas individualmente a un precio más alto.

La trata de esclavos de Estado Islámico estaba altamente organizada e implicaba una inversión logística significativa, incluyendo una red de almacenes, salas de visualización y una flota de autobuses dedicada al transporte de las víctimas. En Siria, la burocracia del mercado de esclavos yazidí estaba organizada por un organismo central llamado el “Comité para la Compra y Venta de Esclavos”. Este Comité delegaba algunas de sus funciones a comités locales y comandantes cuando autorizaba la apertura de un mercado de esclavos en una ciudad específica.

Según un documento de El, publicado en línea y considerado auténtico, se requería que los combatientes se registraran previamente si deseaban asistir a un mercado de esclavos en Homs (Jawad, 2016 citado en CTED, 2021). En la mayoría de los casos, la venta se finalizaba mediante un proceso de subasta. La oferta se presentaba en un sobre sellado en el momento de la compra, y el combatiente que había ganado la oferta estaba obligado a comprar a la esclava.

Mujeres y niñas eran expuestas, tanto en los mercados de esclavos como en los sitios de retención, como si fueran propiedad. Los compradores interesados podían revisar su cabello o dientes y pedirles que caminaran por la habitación, como si desfilaran en una pasarela (Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, 2016: 13 citado en CTED, 2021). Su precio se basaba en estado civil, edad, número de hijos y belleza percibida, y podía oscilar entre 200 y 1.500 dólares (CTED, 2021).

El entorno digital jugó un papel determinante para facilitar la difusión y amplificación del negocio que Estado Islámico se traía entre manos. Los posibles compradores tenían la oportunidad de ver fotografías de mujeres y niñas capturadas en línea, junto con detalles como su edad, estado civil, ubicación y precio, antes de realizar la compra¹³. Luego podían comunicar sus preferencias mediante aplicaciones de mensajería encriptada, como Telegram.

.....
13 Entre los muchos testimonios de esta práctica destaca el caso anteriormente mencionado de Hoda, que tras haber sido esclava de un combatiente durante más de un año, fue puesta a la venta junto con sus tres hijos en una página web de Estado Islámico, siendo identificada como “esclava número 12”. Abu Mital, uno de los intermediarios que facilitó su liberación, afirmó haber negociado directamente con Estado Islámico a través de chats en línea y vía WhatsApp.

العقد / ١٧٨
التاريخ / ٢١ ذوالحجة ١٤٣٥ هـ

لا إله إلا الله
محمد رسول الله
الدولة الإسلامية

بسم الله الرحمن الرحيم
م / اسعار بيع العتائم

وردنا ان سوق بيع النساء والعتائم قد شهد انقفاضا كبيرا وهو ما يؤثر على إيرادات الدولة الإسلامية وتمويل صولات المجاهدين فيها. ولذلك فقد ارتأت هيئة بيت المال وضع الضوابط والأسعار بخصوص بيع النساء والعتائم وتزود جميع المزاولين بهذا العمل بالالتزام بها وبغلافه سيتم اعدام كل مخالف:

الاسعار	التصاغة
٧٥.٠٠٠ ألف دينار	لشعراة البانقة من العمر ٣٠-٤٠ سنة / ايزيدية / مسيحية
١٠٠.٠٠٠ ألف دينار	لشعراة البانقة من العمر ٢٠-٣٠ سنة / ايزيدية / مسيحية
١٥٠.٠٠٠ ألف دينار	لشعراة البانقة من العمر ١٠-٢٠ سنة / ايزيدية / مسيحية
٥٠.٠٠٠ ألف دينار	لشعراة البانقة من العمر ٤٠-٥٠ سنة / ايزيدية / مسيحية
٢٠٠.٠٠٠ ألف دينار	لجميع الاطفال من اسنة ٩ اسنة / ايزيدية / مسيحية

لا يسمح لأي شخص بشراء اكثر من ثلاث عتائم ويستثنى من ذلك الاجانب من الاتراك والسوريين والفلبينيين.

لا إله إلا الله
محمد رسول الله
الدولة الإسلامية

٢١ ذوالحجة ١٤٣٥ هـ

**Lista de precios para esclavas sexuales distribuida por Estado Islámico.
Fuente: Bloomberg**

Además de la fuente de financiación que supuso la venta de yazidíes para Estado Islámico, cuyos combatientes podían llegar a venderlas a precios más altos, éstas desempeñaban sus funciones para objetivos más allá de lo económico. Las evidencias muestran cómo servían a múltiples propósitos y se volvían un “objeto reutilizable”, llegando a ser esclavizadas también como táctica de reclutamiento, facilitando la vida y manteniendo la moral alta entre sus miembros, así como incentivo para atraer a nuevos posibles reclutas. Para ello ejercían, además de esclavas sexuales a los militantes de Estado Islámico, labores domésticas en sus hogares o en el de sus familias. Un testimonio de una niña yazidí de 13 años, que estuvo retenida durante 11 meses en Raqqa y vendida en varias ocasiones, relató su experiencia como esclava sexual así como sirvienta doméstica donde se le obligaba a cocinar, limpiar y lavar la ropa de su dueño combatiente y su familia (Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, 2016: 15).

La explotación humana por parte de EI también ha sido empleada como arma de guerra en el contexto del genocidio yazidí. Además de los miles de asesinados a manos de los yihadistas y los cientos de miles que se vieron forzados a huir de sus hogares, la organización inició un periodo de terror donde la violencia sexual fue instrumentalizada como arma de guerra.

Es posible pensar que Estado Islámico perseguía una violencia indiscriminada sobre la totalidad de los territorios que conquistaba, pero lo cierto es que varios estudios sobre el grupo concluyeron que existía un patrón de comportamiento en su violencia (Ruíz, 2024: 12). Estas investigaciones destacan cómo la organización había desarrollado una política organizacional justificada en términos ideológicos que asentaba las bases sobre los grupos objetivo a los que debía ir encaminada su violencia (Revkin y Wood, 2021 citado en Ruíz, 2024).

Como ocurrió con otros mercados de explotación de yazidíes, como la venta de órganos, en la venta de mujeres con fines sexuales y otros propósitos la

justificación fue proporcionada desde las más altas esferas religiosas a través de un documento titulado “Preguntas y respuestas sobre tomar prisioneros y esclavos”. En esta comunicación, se daba permiso para capturar a mujeres no musulmanas para luego comercializarlas, intercambiarlas o regalarlas como esclavas, ya que apenas eran consideradas propiedad (Liv, 2019: 20).

En términos de propaganda interna, durante su apogeo en Irak y Siria el aparato central de Estado Islámico dirigía su propaganda a hombres jóvenes, ofreciéndoles mujeres y niñas como parte de su “propiedad”. Las mujeres musulmanas eran presentadas como potenciales “esposas” que ayudarían a poblar su autoproclamado “califato”, mientras que las personas de otras etnias y confesiones, como los yazidíes y los cristianos, eran consideradas como botín de guerra y esclavas sexuales (United Nations University, 2016).

También se han documentado actos de reclutamiento forzado sin distinción de edad, género o afiliación religiosa, en particular de niños y adolescentes. Tras el

ataque al monte Sinjar, la organización liderada por Al Baghdadi llevó a cabo una fuerte campaña de adoctrinamiento sistemática y selectiva, separando por la fuerza a niños yazidíes de siete años o más de sus madres y transportándolos a diversos centros de entrenamiento y campos militares en Irak y Siria. Durante este proceso de adoctrinamiento, los niños eran registrados con nuevos nombres islámicos y tratados como reclutas de la organización (Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, 2016). También sufrían interminables sesiones de entrenamiento, donde se les obligaba a presenciar videos de propaganda que mostraban batallas armadas, decapitaciones y misiones suicidas, así como participar en actos de violencia y memorizar versos del Corán (CTED, 2021: 28). Solo en enero de 2017, la organización secuestró en Irak a 400 niños yazidíes como nueva reserva de candidatos para entrenamiento y puesta en combate, secuestrando pocos días después a otros 150 niños para el mismo fin (Departamento de Estado de Estados Unidos, 2019: 234).

El propósito principal de esta estrategia, además del reclutamiento, pasaba por erradicar la identidad personal, cultural y religiosa del pasado de estos niños, a fin de convertirlos en nuevas mentes que, con el paso del tiempo, se consolidaran como parte de la próxima generación de combatientes de la organización. En otras ocasiones, los entrenaban como combatientes suicidas, fomentando así el impacto mediático internacional y amplificando su proyecto propagandístico para futuros miembros, o los llevaban a la mendicidad para aprovecharlos económicamente de algún modo.

Por su parte, los hombres eran sujetos a trabajos forzosos en la agricultura, la ganadería y en proyectos de construcción. Ejemplo de esto último se puede encontrar en la construcción de un sistema de túneles bajo las calles de Mosul, un trabajo que en algunas ocasiones llevó a la muerte a sus trabajadores y que prolongó el asedio de la ciudad (CTED, 2021: 33).

Por todo lo anterior, en el caso de las estructuras centrales de Estado Islámico en Irak y Siria vemos una explotación humana -tanto en forma de delitos de contrabando como de trata- con unos marcados fines tanto operativos como económicos que no mostraron ninguna señal de cesar antes del colapso de su proyecto islamista en 2019. La línea que marca la diferencia entre una industria criminal dedicada a buscar unos beneficios económicos y una organización terrorista con un objetivo marcadamente político es, en esta ocasión, muy difusa. De hecho, teniendo en cuenta todas las evidencias recopiladas a lo largo de estos años, puede concluirse que las actuaciones de Estado Islámico y los objetivos que llegó a perseguir en Irak y Siria bien podrían entrar únicamente en la categoría de crimen organizado.

Hoy en día, y aunque en menor medida por su pérdida territorial e ideológica en la región, Estado Islámico sigue secuestrando, reclutando y utilizando a niños en roles de combate y apoyo, incluyéndolos como escudos

humanos, informantes, fabricantes de bombas y terroristas suicidas, contando algunos con apenas ocho años (Departamento de Estado de Estados Unidos, 2019: 234). De hecho, algunos informes apuntan a que la trata de personas es todavía una fuente de financiación atractiva que podría verse aumentada con las pérdidas de territorio que Estado Islámico lleva experimentando desde 2019 ya que, a medida que ven menguado su poder en Irak y Siria, las personas que todavía siguen bajo su control corren el riesgo de ser explotadas como método de supervivencia financiera y operativa del grupo (Secretario General sobre la violencia sexual relacionada con los conflictos, 2018: 13). Esto, eventualmente, podría incluso brindarles los recursos necesarios para buscar todavía más la reactivación de su proyecto de califato en la zona.

4.2. Estado Islámico en Libia

La trata de seres humanos y el contrabando de personas son los mercados criminales más grandes de África según el Índice del Crimen Organizado Global en su última edición de 2023, ocupando las primeras y segundas posiciones respectivamente. Examinando el mismo informe, observamos cómo Libia ocupa la quinta posición en los índices de criminalidad de todo el continente, habiendo aumentado porcentualmente con respecto a 2021. También obtiene unos índices de resiliencia escasos (traducido en una alta criminalidad), lo que le posiciona en el último lugar de esta lista.

La economía criminal de Libia es desenfrenada. Estratégicamente ubicada en las puertas de Europa y por su condición de país costero con salida al Mediterráneo, Libia actúa como uno de los escenarios más atractivos para las organizaciones criminales. El país se caracteriza por un complejo entramado de redes clientelares, contactos informales y relaciones difusas donde se entrelazan dinámicas criminales y

terroristas. Por su fragilidad institucional y ausencia de gobernabilidad pública unificada, Libia se ha convertido en un espacio donde convergen una amplia variedad de mercados criminales, desde el contrabando de petróleo y el tráfico de drogas y armas hasta la trata de seres humanos y el contrabando de migrantes (Aguilera, 2023a: 169).

El país es punto de tránsito tanto nacional como transnacional. Las rutas de migración para llegar a la costa libia, tunecina o argelina comienzan al final de una antigua ruta de caravanas del desierto que todavía se utiliza para el comercio y contrabando ilícito, desde Somalia o Eritrea a través de África Oriental, y desde Senegal, Mali, Níger y Nigeria por la ruta de África Occidental. Desde este último, Libia recibe cupos de personas desplazadas vía terrestre por los conflictos, especialmente con la actual tendencia del yihadismo en el Sahel y en el cuerno de África, y progresivamente también se observa un aumento de migrantes llegados vía aérea de otros países como Egipto, Bangladesh o Pakistán (Chatzis, 2024: 13).

La falta de recursos y compra de voluntades en el seno del aparato estatal que controla la parte occidental del país, bajo control del Gobierno de Unidad Nacional (GUN, reconocido por Naciones Unidas), ha permitido que los traficantes aprovechen el vacío de poder al oeste de Trípoli. Los esfuerzos del GUN se concentran mayormente en el conflicto armado con el Ejército Nacional Libio, lo que deja pocas capacidades para abordar el problema del tráfico y otras actividades ilícitas (Viriyapah, 2020). Asimismo, pueden encontrarse lazos criminales con la fuerza política que contesta el poder al GUN, encarnado por la figura de Khalifa Haftar.

La desintegración estatal fruto de las revueltas de la década de 2010 que precedieron al derrocamiento de Gadafi ha provocado que la proliferación de milicias y la aparición de economías de protección hayan ganado terreno hasta introducir masivamente actividades del comercio ilegal y aumentar exponencialmente el número de actores, estatales y no estatales, violentos y no violentos, involucrados en los múltiples mercados ilícitos disponibles. Las

oportunidades de aprovechamiento de estos sectores ilícitos, exacerbadas por la irrupción de conflictos violentos en su entorno más inmediato, también ha propiciado que los grupos armados participen en cada vez sectores más amplios de la economía criminal.

En este sentido, encontramos evidencias de participación por parte de múltiples actores en el tráfico y contrabando de armas hacia y desde países vecinos en conflicto, predominantemente en el Sahel, el contrabando de migrantes desplazados por la violencia buscando en Libia su ruta de escape o la trata de seres humanos derivadas de las oportunidades que la migración masiva ofrece, entre otras. Este último punto representa uno de los mercados más provechosos relacionados con la explotación humana. Los migrantes transitando vía terrestre se enfrentan a menudo a situaciones de vulnerabilidad donde su explotación se convierte en un fenómeno recurrente. Precisamente la ruta migratoria que transita desde el Cuerno de África hacia el norte, atravesando Sudán y Libia, y desde los países del Sahel, se han

convertido en corredores críticos para la explotación humana. En estos trayectos, las redes criminales aplican la extorsión, la violación y el secuestro a cambio de un rescate como métodos recurrentes¹⁴.

Por su idiosincrasia y la situación histórica y política actual, quienes participan en la economía criminal libia desde que la revolución irrumpiera en 2011 han diversificado sus actividades, ya sea por necesidad, oportunidad o inercia¹⁵. Entre los actores involucrados en la industria de la explotación humana se encuentran traficantes, contrabandistas y sus intermediarios, pero también funcionarios públicos¹⁶ y grupos armados.

En el primer caso, uno de los puntos de mayor relación entre agentes públicos y grupos organizados ocurre en la ciudad de Zawiya, importante centro de varias redes de delincuencia organizada con poder en ciudades como Zuwara, Sabratha y Warshafana. En Zawiya, el vínculo entre las fuerzas de seguridad y la actividad delictiva es significativo e incluso ha experimentado un aumento constante desde 2020, según el Grupo de Expertos sobre Libia de Naciones Unidas. El informe llega a incluir el mercado ilícito de estupefacientes conocido como “Sifaw para la venta de hachís y papel de liar Bafra”, algo cuanto menos curioso teniendo en cuenta que Mohamed Sifaw es el jefe de la Dependencia Antidrogas del Ministerio del Interior en Zawiya¹⁷ (Grupo de Expertos, 2023a: 7). Por su parte, el propio Comandante de la Guardia Costera en Zawiya, Abd Al Rahman Salim Ibrahim Al Milad, se encuentra en la lista de personas sancionadas por su participación en la violencia contra migrantes y por la

.....
14 Además, muchos de estos migrantes son obligados a realizar trabajos forzados en condiciones extremadamente precarias, como así lo registran las experiencias de trabajos inhumanos en las minas de oro de países como Sudán, Chad y Libia. Estos trabajos no solo conllevan riesgos laborales sino que también llevan a los migrantes a endeudarse con sus empleadores por comida o alojamiento en caso de no cumplir con las expectativas laborales. Fuente: Counter-Terrorism Centre of Excellence.

15 Un caso ejemplar es el de Fahmi Salim Musa Ben Khalifa, conocido contrabandista de productos petrolíferos en el mercado negro que también se dedicaba al tráfico de armas y personas hasta su arresto en 2017, ganándose el apodo de “rey del contrabando” (Aguilera, 2023a: 177).

16 Precisamente la participación de agentes públicos, fuerzas del orden y personal de vigilancia en puestos de mando, puertos, aeropuertos y carreteras representa uno de los principales hándicaps que limitan la prevención de la proliferación de la explotación humana como método lucrativo.

17 El Grupo de Expertos también ha recibido confirmación de diversas fuentes de vehículos avistados del ministerio traficando estupefacientes ilícitos debajo de un puente en esa zona.

protección que ofrece a los criminales para sus operaciones ilícitas relacionadas con la trata y el tráfico ilícito de migrantes.

Otra figura relevante encargada de transportar a los inmigrantes a las costas libias, haciéndolos pasar por combatientes de Haftar, es Abdulah Hagani, antiguo militar chadiano que se unió a las filas de Khalifa Haftar en 2022. En estos momentos, los dos se encuentran en disputa y desde entonces Hagani se dedica a la trata de seres humanos, drogas y armas entre Níger y Libia, con una red operativa en el norte de Níger¹⁸.

A pesar de los múltiples intentos de reducir las oportunidades para cruzar el Mediterráneo, como los acuerdos internacionales con fuerzas de seguridad y sectores políticos, que pueden haber reducido la participación de actores públicos en la economía informal¹⁹, lo cierto es que esto ha tenido un efecto contraproducente, empoderando a las milicias que controlan los centros de detención y los puestos de control en los territorios no gobernados por fuerzas políticas legítimas. Además, el contrabando se ha convertido con el tiempo en una importante fuente de empleo e ingresos en ciudades libias que atraviesan dificultades económicas y laborales (Farley, 2018), dejándolas expuestas a los negocios ilícitos en ausencia de una alternativa económica.

Por su idiosincrasia y la situación histórica y política actual, quienes participan en la economía criminal libia desde que la revolución irrumpiera en 2011 han diversificado sus actividades, ya sea por necesidad, oportunidad o inercia

.....
18 Fuentes locales consultadas por la autora, abril 2024.

19 Naciones Unidas ha acusado incluso a los servicios de seguridad libios de lucrarse con el contrabando e incluso han sancionado a varios individuos afiliados a la guardia costera.

Además de múltiples servidores públicos, los grupos armados llevan involucrándose varias décadas en el contrabando de migrantes tanto dentro como fuera del país. Esto se intensificó especialmente con la crisis migratoria desatada en Libia con el derrocamiento del régimen de Gadafi y los posteriores estallidos de violencia en su vecindario más cercano. Oleadas de migrantes provenientes de Níger, Chad, Egipto y Sudán viajaron a Libia con la esperanza de escapar a Europa y librarse de la agitación económica e inestabilidad en sus países de origen. La falta de gobernanza efectiva libia incrementó todavía más la vulnerabilidad de estos conjuntos de población, que se convirtieron en presa fácil tanto para traficantes como para terroristas y, en pocos años, Libia se convirtió en un nexo y punto de tránsito conveniente para todo tipo de prácticas criminales²⁰ (Viriyapah, 2020).

Si observamos la industria libia de la explotación humana en su contexto más amplio, los actores armados que tienen una relación más estrecha con los criminales pueden clasificarse en milicias e individuos y grupúsculos terroristas.

Aproximándonos al estudio de las milicias armadas, lo primero en señalar en el escenario libio es la reconversión en abierto de ciertas de estas fuerzas en auténticos grupos del crimen organizado. Para ello contamos con diversos ejemplos, como el de Ahmad Al Fitouri, comandante de la milicia de Anas Al Dabbashi. En junio de 2018, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas incluyó a Ahmad Al Dabbashi²¹, junto con otras cinco personas, en una lista de sanciones que implicaban la congelación de activos y la prohibición de viajar. En esta designación se señaló que Al Dabbashi, líder de la milicia Anas Al Dabbashi²², una red activa en las ciudades costeras de Sabratha y Zawiya,

.....
20 En la actualidad, y teniendo en cuenta que la mayoría de los migrantes que llegan a Libia lo hacen mediante traficantes, ya sea hacia el interior de Libia vía las fronteras del sur o desde Oriente Medio y África Oriental vía Egipto y Sudán, esta práctica resulta muy rentable tanto a nivel financiero como operativo. Especialmente, si a esto se le añade el negocio de movilizarlos a países más prósperos en Europa vía tierra, mar y aire.

21 El nombre oficial incluido en la lista de sanciones es Ahmad Oumar Imhamad Al Fitouri.

22 La milicia Al Dabbashi es un grupo armado activo principalmente en la región occidental de Libia, especialmente en la ciudad de Sabratha y la zona de Tallil, al oeste de Trípoli. Fue originalmente creada como una fuerza de resistencia contra el régimen de Gadafi durante la guerra civil libia de 2011. Tras la caída del régimen, la milicia Al Dabbashi ha continuado operando en la zona.

encabezaba una serie de actividades ilícitas vinculadas al tráfico de migrantes. Tras enfrentamientos con otras milicias y organizaciones de contrabando en octubre de 2017, el informe señala que esta milicia tiene una participación directa en el tráfico y contrabando ilegal de migrantes, controlando áreas de salida, campamentos, casas seguras y embarcaciones. El informe también enumera una lista de violaciones a los derechos humanos de los migrantes cometidas por Al Dabbashi, sometiéndolos a condiciones inhumanas, a veces mortales, tanto en el mar como en tierra firme (CSNU, 2018a).

El clan de Al Dabbashi se nutre de diversas fuentes para mantener su influencia y poder en el enclave estratégico donde está activo (cercano a Malta e Italia). Ha mantenido relaciones estrechas con facciones armadas operativas en el país, así como con criminales transnacionales. Uno de estos es Mus'ab Mustafa Abu Al Qassim Omar, también incluido en la lista de sanciones de Naciones Unidas en 2018 al ser considerado "un agente fundamental en

las actividades de trata de personas y tráfico de migrantes que se realizan en la zona de Sabratha" y alrededores (CSNU, 2018b). Las redes de contactos entre ellos y el resto de conexiones con otros grupos criminales se ha demostrado interconectada y transnacional²³.

En el caso de Al Qassim, su red abarca desde Libia, Europa y África Subsahariana hasta ciertos países árabes. Las relaciones de este en sus actividades de trata y tráfico de personas se llegan a extender hasta Ermias Alem (también incluido en la lista de sanciones), eritreo responsable de una de las redes de tráfico ilícito de migrantes más importantes de Libia y cadena de suministro de Al Qassim.

También tenemos el caso de Mohammed Al Amin Al Arabi Kashlaf, líder de la brigada de Al Nasr y comandante de la Guardia de Instalaciones Petroleras en Zawiya, controlando uno de los centros más importantes de las operaciones de tráfico de combustible al oeste del país a pesar de figurar oficialmente bajo el control del GUN. Según lo dispuesto en el Reglamento de la UE 2016/44,

.....
23 Al Qassim mantuvo relaciones estrechas con el clan Al Dabbashi de Sabratha hasta que estalló un conflicto entre ambos por cuestiones de impuestos a cambio de protección.

Kashlaf también controla la red de trata y tráfico en Zawiya (conocida como Red Zawiya) junto con Al Milad y Osama Al Kuni Ibrahim, a pesar de encontrarse los tres sancionados por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (2016: 30).

Desde que fueron incluidos en la lista de sanciones en 2018, tanto Kashlaf como Al Milad han continuado ampliando su red e incorporando más entidades armadas operativas en las zonas de Warshafana, Sabratha y Zuwara, incluyendo elementos de la Brigada 55, el mando del Cuerpo de Apoyo a la Estabilidad en Zawiya (especialmente sus unidades marítimas), y algunos miembros de la Guardia Costera libia. Así es como consiguen ejecutar el plan y obtener grandes ingresos económicos y otros activos, explotando al máximo las capacidades que ofrece la trata de personas y el tráfico de migrantes (Grupo de Expertos, 2023a: 22).

Todos estos individuos, junto con muchos otros y con la connivencia (por omisión o interés) de autoridades y órganos de gobierno, son responsables de serias violaciones a los derechos humanos

cometidas contra migrantes, incluyendo detenciones ilegales, violaciones, torturas y tratos extremadamente degradantes, demostrando cómo ciertas milicias que alguna vez contestaron al poder en Libia, y que ahora ostentan una influencia considerable sobre grandes espacios, han dejado de perseguir objetivos políticos para centrarse en intereses puramente económicos, aunque para ello necesiten mantener una fachada ideológica.

Buena parte de las milicias e individuos criminales han demostrado mantener relaciones estrechas con grupos extremistas de carácter yihadista. La red de Al Dabbashi y su milicia han sido acusados de mantener lazos con Estado Islámico y sus asociados e incluso varios miembros de Estado Islámico provienen de sus filas, incluyendo a Abdallah Al Dabbashi, quien llegó a ser el “califa” de Estado Islámico en Sabratha.

En el caso de Al Qassim, las investigaciones apuntan a que ha realizado sobornos de dinero a personas cercanas a círculos violentos en la zona de Sabratha a cambio de autorización para traficar con migrantes en nombre

de estos grupos extremistas. Las mismas fuentes apuntan a que Al Qassim estaría también conectado a una red de traficantes integrada por “grupos armados salafistas” de Trípoli, Sabha y Kufra (CSNU, 2018b).

Aquí es donde entra en juego el aprovechamiento de la industria de la explotación humana por parte del terrorismo, cuyas posibilidades económicas son tan elevadas y la presencia de redes criminales superpuestas están tan arraigadas que los individuos y grupúsculos terroristas actualmente presentes en Libia han terminado coexistiendo, cooperando e involucrándose activamente con el crimen organizado.

Los grupos terroristas y la industria criminal de la explotación humana no solo prosperan en situaciones de inestabilidad, sino que también se benefician mutuamente en una relación de simbiosis. Las organizaciones terroristas generan tanto la oferta como la demanda para los traficantes, creando un ciclo de beneficio mutuo. Al adquirir víctimas de trata para ofrecer servicios a sus reclutas, estas organizaciones

incrementan las poblaciones vulnerables que los traficantes pueden explotar (Viriyapah, 2020).

Al contrario que en el caso de Estado Islámico en Irak y Siria, donde la organización estableció directamente un entramado criminal de trata de seres humanos y contrabando de personas como método financiero y operativo preferente, en el caso de Libia los individuos y grupos terroristas han mantenido una participación indirecta, especialmente en su época de mayor apogeo. Entre 2015 y 2016 se documentaron numerosos acuerdos entre El y grupos armados con amplias conexiones con traficantes y contrabandistas ubicados en Kufra, al sureste del país (Romanet, 2020: 17). En términos económicos, antes de la expulsión de Estado Islámico de Sirte, su principal bastión, sus combatientes se beneficiaban de un sistema de tarifas aplicadas a los contrabandistas que transitaban sus territorios (Crowcroft, 2015). También obtenían grandes sumas de financiación con prácticas de secuestro y tortura a migrantes, exigiendo pagos a sus familiares a cambio de que éstos pudieran retomar el viaje hacia su destino (Gebrekidan, 2016). En cuanto

a finalidades de reclutamiento, también existen evidencias de grupos que juraron lealtad a Estado Islámico en Libia que estaban involucrados en prácticas de secuestros y abuso sexual. Solo entre 2015 y 2016, El en Libia secuestró y tomó cautivos a 540 migrantes y refugiados, incluidas 63 mujeres que fueron forzadas a esclavitud sexual para los combatientes del grupo (Liv, 2019: 21).

Por la pérdida territorial y dominación ideológica actual, Estado Islámico es incapaz de sacar el rendimiento que obtenía durante su época de mayor apogeo hace casi una década. Aun así, la pérdida de capacidades no ha provocado una falta de voluntad de revertir esta situación. En 2019, un informe de Europol advertía de la tímida pero existente capacidad de reclutamiento y radicalización de los colectivos vulnerables de migrantes en el sur de Libia, a quienes los combatientes de Estado Islámico tenían “acceso inminente”. El informe también mencionaba la explotación de las rutas de migración hacia Europa por parte del

grupo, aunque se desconocía su alcance real y se determinaba que la infiltración terrorista entre los migrantes había sido limitada (Trauthig, 2019: 12). Otras fuentes afirman que Estado Islámico todavía controla rutas comerciales y mantiene su papel como recaudador de impuestos a los traficantes, agentes de extorsión y saqueo, y, cuando surge la oportunidad, realiza secuestros a cambio de rescates (Grupo de Expertos, 2023b: 18). Otros datos también indican la detección de combatientes terroristas retornados que, a través de Sudán, posteriormente intentan llegar a Europa vía Libia, además de la colaboración informal pero existente entre el crimen organizado y el terrorismo para el traslado regional de combatientes²⁴.

Desde la Unión Europea y las fuerzas de seguridad libias existe el conocimiento de que miembros de Estado Islámico trabajan con traficantes de migrantes con conexiones en Libia y en el entorno transnacional. Por un lado tenemos el ejemplo de Alagie Touray, gambiano que llegó a Messina (Italia) en 2018 y que, mientras esperaba la resolución sobre su solicitud de

refugiado, planeaba un ataque en Europa²⁵. Por otro lado tenemos el caso de Ali Hussein Ali, terrorista de El que, hasta su arresto en 2017, ejercía como enlace clave en la industria del contrabando y la trata de personas²⁶. Apodado “el confiable”, Ali desempeñó un papel crucial en la red criminal Magafe²⁷. Sus funciones se centraban en facilitar el viaje de reclutados desde Kenia a Somalia para unirse a Estado Islámico en Libia, a ofrecer paso seguro hacia Europa a migrantes irregulares a través de Libia y a funciones financieras vinculadas a una red de Estado Islámico que se expandía desde Libia hasta Somalia, Sudán del Sur y Sudán (CTED, 2021: 13). Este individuo, de origen somalí que se movió desde 2010 por tres países distintos antes de unirse a Estado Islámico en Trípoli, se convirtió en 2016 en un agente clave para la organización terrorista y la red de contrabando/trata de personas Magafe en Libia²⁸.

La capacidad de Estado Islámico de explotar y atraer a los cupos de migración que transitan a través de Libia ha dependido en gran medida de su control real sobre el territorio. Con la pérdida de Sirte, se ha vuelto complejo encontrar evidencia sobre el terreno acerca de la explotación y reclutamiento de migrantes, aunque, como algunas fuentes apuntan, esto no significa que esas actividades no se estén produciendo y tengan intención de ampliarse a medida que se busca la reactivación de las operaciones del grupo en el sur del país, donde actualmente están presentes. La voluntad de la rama de Estado Islámico en la participación de la industria de la explotación humana es considerable, en vista a las muchas oportunidades para este negocio que existe en Libia.

.....
25 Tras su arresto en Italia, se encontró un video que contenía un juramento de lealtad al califato de El, grabado y enviado a través de Telegram “a una serie de destinatarios”. Fuente: Europol.

26 En el momento de su arresto, Ali estaba exigiendo más de medio millón de dólares de su “jefe”. El dinero era una “comisión de facilitación” que debía recibir tras entregar a los reclutados y migrantes irregulares a sus destinos. Fuente: CTED.

27 Organización criminal de origen libio operativa en 12 países sospechosa de mantener vínculos con Estado Islámico. La red Magafe es conocida por realizar secuestros y actividades relacionadas con la trata y el contrabando de personas.

28 Según las investigaciones, Ali y sus cómplices albergaban a reclutados y migrantes irregulares en Kenia antes de ayudarlos a viajar a Libia, Siria y Europa. Al llegar a Libia, el crimen organizado, especialmente Magafe, los detenían y los liberaban únicamente tras el pago de un rescate que oscilaba entre los 2.500 y 7.000 dólares. El dinero se enviaba a Mogadiscio a través del sistema Hawala en Kenia y luego se canalizaba a Estado Islámico en Libia. Los migrantes capturados pedían ayuda a sus familiares en Kenia para pagar el rescate y asegurar su liberación, mientras que los reclutados por el grupo extorsionaban a sus familiares con falsas reclamaciones de captura, usando el dinero para financiar sus actividades. Fuente: CTED.

4.3. JNIM en el Sahel Occidental

JNIM es la organización terrorista más activa del Sahel en la actualidad. El grupo ha logrado aprovechar las dinámicas para extender su influencia más allá de sus bastiones tradicionales en el norte de Mali y la triple frontera entre Mali, Burkina Faso y Níger, consolidándose como un actor político y social relevante que se alimenta de los conflictos intercomunitarios e interétnicos locales para su expansión (Aguilera, 2024: 74).

Al igual que durante la presencia francesa, las actividades de JNIM se centran en atacar a las fuerzas extranjeras que apoyan a los agentes de seguridad locales y explotar el vacío de seguridad derivado de la partida de las tropas internacionales sobre el terreno²⁹. Desde una perspectiva geográfica, las acciones de JNIM en los últimos años han tenido un impacto significativo al ampliar y consolidar su presencia al sur del Sahel, llegando a aterrizar en países del Golfo de Guinea como Benín,

Togo y Costa de Marfil y, por ende, a la rampante economía criminal de la zona.

Al Qaeda y sus franquicias territoriales interactúan de diversas maneras con el crimen organizado, dependiendo del contexto, capacidades y oportunidades. En Libia, vemos figuras prominentes en la industria del tráfico humano como la de Abdelhakim Belhadj (alias Abu Abdallah Assadaq), político islamista y líder militar que reapareció en Libia bajo el paraguas del brazo político de Al Qaeda junto a los Hermanos Musulmanes a través del partido Al Watan. Desde 2012, las milicias del que fuera el jefe del Consejo Militar de Trípoli y del Grupo Islámico Combatiente Libio fueron las responsables de las llegadas en masa a Europa de buena parte de inmigrantes procedentes de Libia³⁰. Si observamos el caso de Al Nusra, vemos cómo la rama de Al Qaeda en Siria aumentó sus ingresos mediante la práctica de los secuestros, aunque se desconocía una participación directa del grupo en actividades relacionadas con la

29 A consecuencia de la reconfiguración de las estructuras de defensa y seguridad regionales, entre 2022 y 2023 se replegaron del Sahel la misión francesa en Mali (Operación Barkhane), la misión de Naciones Unidas en Mali (MINUSMA) y las misiones europeas en Níger (EUCAP y EUMPM). También se disolvió la alianza regional del G5 Sahel y su Fuerza Conjunta.

30 Entre 2015 y 2022 Belhadj estuvo asentado entre Turquía y Catar. Desde 2022 se le considera responsable de las milicias que controlan buena parte de Libia, independientemente de su residencia habitual.

trata de personas (Fanusie y Entz 2017 citado en Avdan y Omelicheva, 2021: 2). Con respecto a las organizaciones terroristas presentes actualmente en el Sahel Occidental, similar al caso de Libia, vemos cómo éstas se aprovechan de manera estrecha del ecosistema de economías ilícitas e informales a su alcance para avanzar las estrategias de gobernanza en sus áreas de influencia. Esta expansión va más allá de la aspiración ideológica y está orientada a controlar los corredores clave transitando a través de la histórica ruta comercial transahariana.

Tanto antes de la creación de JNIM como con Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI), Al Qaeda ha obtenido grandes beneficios indirectos del tráfico y contrabando de diversos bienes legales, ilegales y criminales. Ofrecen tránsito seguro, proporcionan vehículos y facilitan casas seguras que luego utilizan los contrabandistas, recibiendo un pago por los servicios prestados (Jespersion, Ochieng y Burudi, 2022: 6). Además de la remuneración por el servicio, los actores criminales desempeñan un papel relevante aceptando y sosteniendo la presencia de JNIM en sus zonas de

influencia, compartiendo con estos información y conocimientos sobre el terreno y aprovechando la predisposición de las redes criminales locales hacia el avance político de la agenda de los terroristas, con los que a menudo mantienen lazos de amistad, afiliación y/o parentesco. Así, buena parte de los recursos financieros actuales de JNIM ha permitido el despliegue de estrategias sólidas de generación de ingresos provenientes de la economía criminal gracias a sus afiliados y contactos, heredados en parte de AQMI y otros grupos que precedieron a la coalición (Afriyie, 2024: 9).

Similar a lo que ocurre con industrias como la del petróleo, las drogas, las armas y los recursos naturales, la trata y el contrabando de personas se ha convertido en un mercado que JNIM conoce bien y del cual frecuentemente se beneficia, tanto financiera como estratégicamente.

En cuanto a objetivos económicos o financieros, el sistema de pago a cambio de tránsito es el principal método de participación en la economía criminal por parte de JNIM en casi todas sus áreas de influencia, independientemente

del bien ilícito con el que se comercie. Si observamos el contrabando, vemos cómo las rutas de tránsito a través del Sahel que buscan llegar hasta importantes centros criminales libios como Zuara (Zuwara) forman parte de esta antigua ruta de caravanas en el desierto que comentábamos unas secciones más arriba y que todavía se utiliza para el comercio y el contrabando de armas, drogas y personas. Desde el cuerno de África, a través de África Oriental, y desde Senegal, Níger y Nigeria a través de la ruta de África Occidental, todas las rutas pasan inevitablemente por territorios del Sahel controlados por Al Qaeda, por lo que no es razonable pensar que los contrabandistas de personas puedan moverse en territorios controlados por el terrorismo sin su cooperación y aprobación. En la triple frontera, además del tráfico y contrabando de drogas y armas, JNIM recibe pagos a cambio de ofrecer un paso seguro para el tránsito transfronterizo de migrantes vía Argelia y Libia, para posteriormente alcanzar Europa. Este modelo de recaudación se mantiene como una fuente constante y continuada para las finanzas del grupo.

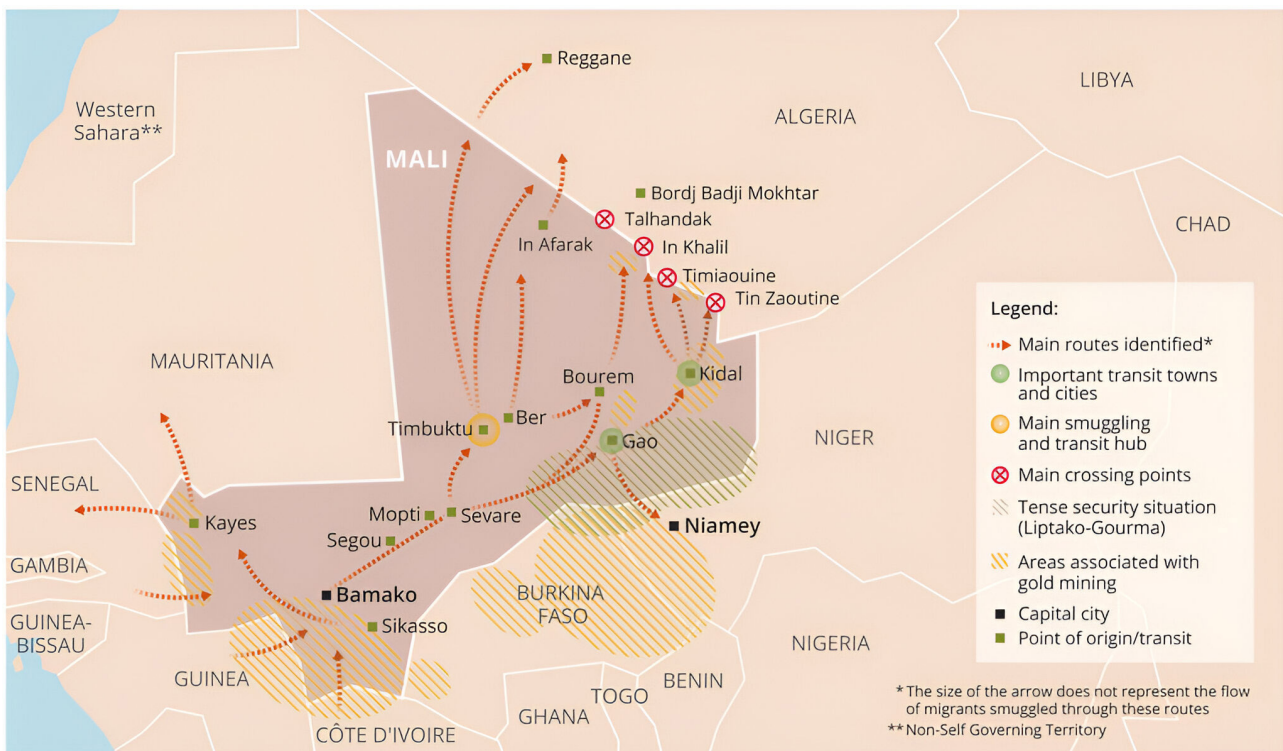
Similar a lo que ocurre con industrias como la del petróleo, las drogas, las armas y los recursos naturales, la trata y el contrabando de personas se ha convertido en un mercado que JNIM conoce bien y del cual frecuentemente se beneficia, tanto financiera como estratégicamente

53

En Mali, los contrabandistas de migrantes transitando por rutas controladas por grupos armados a menudo tienen afiliaciones o son miembros de estos grupos³¹, especialmente en Tombuctú, principal centro de tráfico de migrantes en su trayecto hacia el norte. En 2022 se encontraba la figura de Mahamadou Ag Rhissa (alias Mohamed Talhandak), miembro del Alto Consejo para la Unidad del Azawad (HCUA, por sus siglas en francés) que controlaba el movimiento de migrantes en y a través

.....
31 En 2020, el movimiento de migrantes entre Tombuctú e In Afarak en Mali estaba principalmente bajo la protección del MAA-CMA y algunos elementos del MNLA. En Gao, la situación es menos clara, ya que el territorio al norte de Gao, por donde deben pasar los migrantes, se encuentra muy disputado. Fuente: Grupo de Expertos de Naciones Unidas (2020).

de Talhandak, cerca de la frontera con Argelia. Este individuo estuvo implicado en la explotación sexual de mujeres migrantes, supuestamente reteniendo a mujeres en cautiverio y explotándolas sexualmente hasta que se pagaban sumas que oscilaban entre los 300 y los 350 dólares para su liberación (Garver-Affeldt, 2022: 27). El Grupo de Expertos de Naciones Unidas informó que el HCUA controla esta zona de Talhandak pero también Tindiska, al norte de Gao y Kidal, cerca de la frontera con Argelia, por la que transcurre el tráfico y contrabando de personas (Grupo de Expertos, 2020: 40).



Principales rutas de contrabando de migrantes en Mali entre 2020 y 2021.

Fuente: UNODC

Para 2024, al menos dos personas son las responsables de llevar a miles de migrantes subsaharianos a Argelia y Libia, y en menor cantidad a Túnez. Al Izza Ould Yahia, antiguo miembro del Movimiento Árabe del Azawad de la tribu berabiche, es el hombre que controla casi todas las rutas de trata de personas para llevar a los inmigrantes a los países del norte de África, sobre todo a Argelia. Este antiguo miembro de los movimientos del Azawad pasó en enero de 2024 a las filas del Emirato de Tombuctú (AQMI), operativo en el norte de Mali y en la frontera este de Mauritania. Ould Yahia básicamente recoge a los inmigrantes para dejarlos en la frontera argelina o mauritana, con unas tarifas que rondan aproximadamente entre los 1.000 y los 2.500 euros por migrante. Del total, destina unos 300 de media para la guardia de JNIM³².

En Burkina Faso, cuya economía ilícita se basa en el contrabando de todo tipo de productos, JNIM se ha instalado

en puntos clave a lo largo de la zona sur del país fronteriza con el Golfo de Guinea. Estos países costeros, especialmente Togo y Benín, son conocidos como fuentes importantes de bienes de contrabando no solo hacia Burkina Faso sino también hacia las naciones vecinas (Beevor, 2022: 15). Estas conexiones son críticas para que prospere el negocio del contrabando, colaborando para ello con los grupos armados y con JNIM.

Si nos centramos en el aprovechamiento directo de la explotación humana con fines operativos, observamos cómo JNIM se beneficia de este mercado con fines esencialmente de reclutamiento y como táctica de guerra. En el caso del contrabando de migrantes, a través del reclutamiento de estos entre sus filas. Poniendo como caso práctico el ejemplo de uno de los mayores traficantes de seres humanos de Mali, encontramos la figura de Baye Coulibaly³³. Este destacado traficante de migrantes³⁴ en Gao ha aprovechado

32 Fuentes locales consultadas por la autora, abril 2024.

33 Coulibaly lideraba múltiples operaciones que facilitaban el contrabando de migrantes. Esto incluía dirigir una compañía de transporte en 2019 que movilizaba alrededor de 25 migrantes por semana, proporcionar documentos de viaje malienses falsos y controlar "puestos de control" ilegales en las rutas que salían de Gao. Fuente: UNODC.

34 Desde el inicio del actual auge en la extracción de oro en el Sahel, y antes de que esta actividad atrajera la atención de las organizaciones terroristas, Coulibaly proporcionaba 30 trabajadores por mes para trabajar en la prospección tradicional de oro.

desde 2010 su condición para reclutar a migrantes para el Groupe d'Autodéfense Touareg Imghad et Alliés (GATIA) y posteriormente para el Mouvement Patriotique Ganda Koi (MPGK), al que hoy pertenece. Coulibaly también ha estado proporcionando combatientes para JNIM, utilizando su red de tráfico de personas (UNODC, 2022: 27).

Ahmadou Ag Asriou es también uno de los implicados en todo tipo de tráfico y contrabando en el norte de Mali y Níger. Ag Asriou, incluido en la lista de sanciones de Naciones Unidas desde 2018, lleva a cabo sus actividades con la ayuda de Mohammed Ben Ahmed Mehri, alias el Rubio, quien también fue objeto de sanciones de Naciones Unidas en 2019. Estos dos, Rubio y Ag Asriou, dirigen sus operaciones de contrabando en Níger, mientras que Ag Asriou está acusado de apoyar a terroristas de Al Murabitún, la facción de JNIM en Gao (Mali) y Níger.

Otro de los casos más emblemáticos en los que queda patente la conexión de JNIM con operaciones de tráfico de personas fue la operación que acabó con la detención de tres malienses en Ghana, posteriormente extraditados a Estados Unidos y acusados de tráfico de drogas y de trata de personas³⁵. Los tres fueron acusados de coordinar el traslado de un cargamento de cocaína desde Ghana a España, y durante su interrogatorio por parte de la DEA, confesaron que AQMI proporcionaba protección y seguridad para su cargamento, que atravesó Togo, Burkina Faso, Ghana y Mali. Los detenidos defendieron que en algunos casos llegaban con su cargamento a las costas del norte de África con la ayuda de Al Qaeda, y también afirmaron que cooperaban con la organización para traer inmigrantes de Bangladesh, India y Pakistán a España.

Si ponemos el foco en el complejo W-Arly Pendjari o WAP, ubicado en la triple frontera entre Burkina Faso, Benín y Níger, observamos cómo la estrategia de JNIM pasa por aprovechar económicamente las rutas de tránsito de

.....
35 Más información en Aguilera, A. (2022). *Tráfico de drogas y yihadismo en África*. Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo.

la mercancía a través de la imposición de un pago sobre los residentes, en vez de aplicar el impuesto a los contrabandistas. Este conjunto de áreas protegidas, difícilmente penetrables para las operaciones de las fuerzas de seguridad por su desconocimiento sobre el terreno y las enormes posibilidades de ocultación que la reserva natural ofrece, actúa como un espacio de lucro para todo tipo de actividades ilícitas en las que participan traficantes, contrabandistas y comunidades que carecen de alternativas económicas y laborales. JNIM se aprovecha de esta situación y permite a las comunidades continuar sus actividades ilícitas, manteniéndose al margen de éstas a cambio de legitimar a la organización como fuerza gobernante. El complejo WAP también ejerce como espacio donde ocultar a rehenes, en vista de la facilidad de ocultar su posición y del efecto disuasorio que la ubicación ofrece para una posible operación de rescate (Sampaio et al, 2023: 9).

Además del modelo de recaudación de pagos por tránsito o actividad, encontramos la práctica de

los secuestros. Extendida a lo largo de las últimas dos décadas, organizaciones como AQMI han financiado buena parte de sus actividades manteniendo cautivos a extranjeros en Argelia, Mali, Burkina Faso y Níger³⁶. Desde la década de 2010, motivado por el descenso de posibles rehenes que tomar, las arcas de Al Qaeda en África Occidental han dejado de depender en gran medida de los rescates de extranjeros como método de supervivencia financiera, virando hacia el secuestro de locales en su lugar. Este tipo de prácticas se encuentran ahora en el centro de las actividades económicas de JNIM, teniendo como objetivo a figuras relevantes del mundo político y empresarial en Mali, Burkina Faso y Níger. Para 2017, esta práctica aportaba el 40% de la financiación anual del grupo (Índice Global del Terrorismo, 2024: 57). Según datos de ACLED, entre 2017 y 2023 JNIM ha llevado a cabo un total de 810 secuestros en Burkina Faso, Mali, Níger, Togo y Benín, más de la mitad de ellos perpetrados en Burkina Faso en 2022.

.....
 36 En noviembre de 2023 era liberado un clérigo alemán en Mali secuestrado por criminales y llevado ante JNIM.

Además de las motivaciones económicas, los secuestros también se emplean como parte de una estrategia operativa que acompaña a la expansión territorial y son un componente constante en el modus operandi de JNIM. En el corazón de esta estrategia reside el forzar unas dinámicas políticas y sociales favorables, creando un entorno intimidatorio como parte de una táctica de guerra que los lleve a encontrar una menor resistencia de la comunidad a la que busca dominar. De hecho, un aumento de los secuestros sirve como termómetro para medir prematuramente una posible incursión de la organización en nuevos espacios, donde aún no ha consolidado su presencia e influencia, por lo que esta práctica también obtiene provechos en la recopilación de información sobre los poblados, las lealtades y las dinámicas de negocio de la zona.

Especialmente desde la ampliación territorial de JNIM hacia el Golfo de Guinea en 2022, la incursión de la organización en nuevos espacios al norte de Benín también ha traído consigo la práctica de los secuestros para lograr tejer alianzas con figuras

clave y supeditar comunidades. Mientras que los secuestros a cambio de rescates a manos de bandas criminales u otros grupos armados continúan en todo el país hasta el día de hoy, los grupos terroristas, especialmente JNIM, son ahora los actores más comunes detrás de los secuestros en la zona norte (Berger, Tagziria y Mossi, 2024: 2).

Con la expansión de JNIM hacia el sur del Sahel, es previsible que su influencia en la economía informal de la región se incrementa con el fin de sustentar financiera y operativamente al grupo. Esto no solo les permitirá aprovechar los flujos de comercio ilícito que transitan por esta zona, sino que también obligará a traficantes y contrabandistas a incluir en sus costes operativos el pago de tránsito a los combatientes de Al Qaeda. Esta dinámica corre el riesgo de abrir un corredor ilícito que, con la presencia activa de JNIM en la economía criminal, desate una ola de criminalización tanto en África Occidental como en las regiones vecinas. La implicación directa de JNIM en estas actividades intensificará la inestabilidad y complicará los esfuerzos de gobernanza y desarrollo de los países costeros en el flanco oeste y sur de África Occidental, creando un entorno aún más inestable para autoridades locales y regionales.

4.4. Boko Haram en Nigeria

Basándonos en el mismo Índice del Crimen Organizado Global de 2023 que en el caso de Libia, vemos cómo Nigeria ocupa el segundo lugar en la lista de naciones con mayor tasa de criminalidad en África y la sexta posición del mundo (2023a: 12).

La economía criminal se ha convertido en una preocupación de primer orden en el país más poblado de todo el continente con un extenso litoral en el Golfo de Guinea. Nigeria alberga una red bien estructurada de actividades delictivas organizada en torno a vínculos étnicos y familiares, entre las que predominan el tráfico de drogas, armas y personas. La debilidad institucional y la corrupción sistemática han permitido que estas actividades ilegales prosperen en un entorno propicio para el crimen organizado, especialmente en lo que concierne a la trata de seres humanos (GITOC, 2023b: 5).

El contrabando de personas también es una actividad extendida en Nigeria, alimentada por su enorme crecimiento demográfico, unos niveles agudos de pobreza y una importante porosidad en sus fronteras. Las redes nigerianas de contrabando suelen ir destinadas a países europeos, normalmente transitando a través del Sahel para llegar al norte de África. A diferencia de otros países de África Occidental, el contrabando de personas desde Nigeria hacia el norte de África y Europa tiende a ser más organizado, con la participación de las diásporas nigerianas y organizaciones criminales transnacionales (GITOC, 2023b: 3).

Además del contrabando de personas, Nigeria se enfrenta a otras amenazas criminales como los secuestros a cambio de un rescate, la extorsión y el chantaje, particularmente a manos de los grupos terroristas que, junto a los actores participantes en el conflicto interétnico e interreligioso nacional, han sumido al país en una espiral de violencia e inseguridad.



Pupitres vacíos con los nombres de las niñas secuestradas por Boko Haram en Chibok.

Fuente: Brookings Institution.

El 14 de abril de 2014, el grupo terrorista Boko Haram secuestraba a 276 niñas de un internado en Chibok (estado de Borno, Nigeria), marcando un punto de inflexión en la trata de mujeres y niñas para fines operativos y estratégicos del grupo. Según relatos de primera mano, los combatientes de Boko Haram les dieron a las cautivas la opción de casarse con ellos o convertirse en sus esclavas (Amnistía Internacional, 2024).

La liberación gradual de las “niñas de Chibok” se logró a través de negociaciones con el gobierno nigeriano, que incluyeron el intercambio de cinco líderes de Boko Haram y el pago de aproximadamente 3.7 millones de dólares en rescate (CTED, 2021: 36). Este ataque, junto a otro ocurrido en Dapchi en 2018, donde la organización secuestró a 110 alumnas con las mismas intenciones que en el caso de Chibok, provocan que Boko Haram sea una de las organizaciones regionales más involucrada con la trata de seres humanos.

Boko Haram es uno de los dos principales grupos terroristas que opera en la región de la cuenca del Lago Chad, junto a la rama de Estado Islámico en África Occidental (ISWAP). Sus capacidades financieras y recursos humanos han estado marcadas por fuertes altibajos desde la creación de la organización hace más de dos décadas, supeditadas a la efectividad de sus campañas de violencia contra el gobierno y contra objetivos civiles. A pesar de la relativa pérdida de capacidades de la organización en la actualidad comparada con la que ostentaba hasta 2020, a raíz de la intensificación de las operaciones militares de las fuerzas de seguridad regionales contra el grupo y los fuertes enfrentamientos con ISWAP, Boko Haram ha demostrado una resistencia considerable a las presiones tanto externas como internas, provocando una oleada de ataques sistemáticos que se ha saldado con la muerte de miles de personas y el desplazamiento de más de dos millones de los habitantes de la parte noreste del país.

Su modus operandi se encuentra focalizado en ataques indiscriminados contra civiles, fuerzas de seguridad y

comunidades enteras, pero también en crímenes humanitarios entre los que se incluyen secuestros masivos, toma de rehenes y trata de seres humanos, lo que da a entender que Boko Haram concibe a la explotación humana como uno de sus pilares fundamentales de acción violenta.

Su participación en esta industria criminal no está limitada a un propósito operacional, sino que atiende a una amplia variedad de fines relacionados entre sí. Los más relevantes de cara a nuestro análisis tienen su fundamento en los métodos de reclutamiento, de limpieza identitaria y como arma de guerra. En cuanto a la primera categoría, observamos cómo la participación de Boko Haram en la explotación de niños es sistemática. Algunos informes de Naciones Unidas confirman que, entre 2009 y 2017, al menos 8.000 niños han sido reclutados y utilizados por el grupo en Nigeria (CSNU, 2017b: 18). En estas operaciones de secuestro, los niños son explotados esencialmente como medio de reclutamiento para la lucha armada, poniéndose a prueba incluso en contra de sus propias familias a modo de demostrar lealtad al grupo, pero

también como cocineros, informantes y mensajeros. Por el contrario, las niñas son secuestradas en mayor medida con la finalidad de mantener elevada la moral del grupo, tanto en el aspecto sexual (mediante matrimonios forzosos y violencia sexual) como en el entorno del hogar (sirvientas domésticas para limpiar, cocinar). También sirven para transportar equipos y armas. Algunos de los ataques de Boko Haram han tenido como finalidad precisamente el identificar a aquellos niños que se niegan a unirse al grupo, así como a mujeres y niñas solteras.

Con respecto a los secuestros de mujeres, los fines de esclavitud, trabajos forzados y explotación sexual para sus combatientes forman parte de la identidad de Boko Haram al menos desde 2013. El grupo ha secuestrado a miles de mujeres y niñas en los estados de Borno, Yobe y Adamawa, sometiéndolas a condiciones de auténtica esclavitud. Las supervivientes rescatadas de Boko Haram han confirmado la existencia de una jerarquía en esta esclavitud,

donde aquellas que se niegan a casarse con los militantes son tratadas como esclavas de las esposas ya esclavizadas. Estas mujeres suelen ser obligadas a convertirse al islam³⁷ y se ven sometidas a realizar tareas domésticas, trabajo de esclavos y explotación sexual, incluidos matrimonios forzados con miembros del grupo y la utilización como bombas humanas en operaciones militares³⁸.

La táctica identitaria de Boko Haram se evidencia claramente en los secuestros de niños y jóvenes, dirigidos específicamente a la creación de la próxima generación de combatientes. Este enfoque incluye conversiones forzadas, lo que les permite no solo aumentar su número de combatientes, sino también moldear a estos individuos desde una edad temprana para que adopten y promuevan la ideología del grupo. Al seleccionar específicamente a colectivos (principalmente cristianos) con características particulares (jóvenes en edad escolar), Boko Haram busca dismantelar las estructuras culturales y religiosas de las comunidades a las que pertenecen, optando por los secuestros como táctica de subversión del tejido social.

.....
37 La organización ha forzado a mujeres y niñas secuestradas a recitar versos del Corán.

38 En el caso de la violencia sexual por parte de sus combatientes, vemos un aumento significativo en los últimos años. En 2016, el número de casos de abusos sexuales verificados fue de 644, mientras que en 2017, se registraron 997. Fuente: Secretario General sobre la violencia sexual relacionada con los conflictos, 2018.

Además de fines de reclutamiento y limpieza identitaria, cada vez más niños y niñas están siendo empleados como método de guerra. El uso de niños como escudos humanos y terroristas suicidas ha generado un impacto mediático que ha permitido amplificar el mensaje de la organización de cara a minar la confianza social. En mayo de 2015, por ejemplo, una niña de unos 12 años fue utilizada para detonar una bomba en una estación de autobuses en Damaturu (Estado de Yobe), acabando con la vida de siete personas. Acciones similares han sido registradas en Camerún y Níger (UNODC, 2017: 1). En 2017, Boko Haram utilizó al menos a 158 niños (niños y niñas) como bombas humanas, cifra que contrasta significativamente con los 19 utilizados en todo 2016 (Departamento de Estado de Estados Unidos, 2019: 332).

A pesar de que los fines operativos son significativamente mayores en términos comparativos que los objetivos económicos, es relevante destacar que Boko Haram también ha recurrido a la financiación del grupo con la práctica de

los secuestros. Sin ir más lejos, Abubakar Shekau³⁹ declaró tras lo ocurrido en Chibok que la organización tenía la intención de vender a las mujeres y niñas secuestradas a sus combatientes como esclavas o esposas (CTED, 2021: 32). En el enclave Zamfara-Katsina, los grupos criminales conocidos oficialmente como “bandidos” realizan secuestros para Boko Haram a cambio de compensaciones económicas y otros servicios, lo que sugiere que esta colaboración puede prolongarse en el tiempo⁴⁰. Aun así, lo que mueve principalmente a Boko Haram con la práctica de secuestros se centra más en finalidades operativas y no tanto en objetivos económicos, aunque esto no significa que en ocasiones puntuales puedan beneficiarse de estas actividades en términos de capital financiero.

Similar al caso de Libia, el crimen organizado operativo en Nigeria, Níger, Chad y Camerún se ha beneficiado sustancialmente de las actividades del terrorismo en la zona. El desplazamiento masivo y la inseguridad generalizada a consecuencia de las actividades tanto de Boko Haram como de ISWAP en

.....
39 Líder de Boko Haram hasta su muerte en mayo de 2021.

40 Fuentes de la Comisaría General de Información (CGI) consultadas por la autora, octubre 2023.

lago Chad han favorecido un mercado criminal con mayores posibilidades de explotación y oferta⁴¹. Numerosos grupos criminales se han aprovechado de la situación de necesidad de los inmensos cupos de desplazados por los conflictos, si bien en esta ocasión Boko Haram no parece haber priorizado su participación en el tráfico humano tanto como prioriza otros tipos de contrabando⁴². Sin embargo, se han documentado vínculos entre traficantes y miembros de la organización a lo largo de rutas que van desde el sur de Nigeria, pasando por Níger y Libia, hasta Europa (Liv, 2019: 23). Esto indica que, aunque en menor medida, la explotación humana también tiene el fin de servir como herramienta de movilidad, instrumentalizando a los desplazados.

La táctica identitaria de Boko Haram se evidencia claramente en los secuestros de niños y jóvenes, dirigidos específicamente a la creación de la próxima generación de combatientes

.....
41 Las mujeres convertidas en refugiadas por las actividades de Boko Haram con frecuencia terminan como víctimas de traficantes y reclutadas para la prostitución forzada. Fuente: International Institute for Counter-Terrorism.

42 Véase la participación de Boko Haram en el contrabando de armas en Aguilera, A. (2023). *Terrorismo y crimen organizado: tráfico y contrabando de armas en el norte de África y el Sahel*. Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo.

4.5. Al Shabaab en Somalia

Somalia se encuentra solo por encima de Libia en el ranking de baja resiliencia del Índice del Crimen Organizado Global 2023, lo cual rinde buena cuenta de los negativos datos que baraja el país en lo que a la lucha contra las actividades del crimen organizado se refiere.

Especialmente desde que el régimen de Siad Barre se desmoronara en 1991, Somalia ha estado inmersa en un estado de anarquía y conflicto, intensificando las actividades delictivas que ya tenían lugar antes de la llegada de Barre al poder (Brooks, 2010: 4). Desde entonces, el país ha sido categorizado como Estado tanto colapsado como fallido, y la ausencia cronificada de un gobierno central efectivo ha dejado un vacío de poder que ha sido aprovechado por diversas facciones y grupos criminales para ejercer control sobre vastas áreas del país.

El crimen organizado ha proporcionado orden en ausencia de un aparato estatal efectivo. El tráfico ilegal de armas, la piratería, el contrabando de personas y el narcotráfico son algunas de las actividades criminales más prominentes que modelan el sistema económico nacional, generando enormes ganancias a aquellos involucrados y obstaculizando cualquier proceso de reconstrucción y desarrollo de la economía formal. La economía criminal en Somalia no solo afecta al país en sí, sino que también tiene ramificaciones a nivel regional e internacional. La condición geográfica del país le permite disponer de fuertes conexiones transnacionales y vínculos con otros mercados ilegales tanto hacia el interior de África como hacia sus contrapartes al otro lado del mar rojo y el golfo de Adén, especialmente Yemen.

En un contexto de fragilidad institucional y corrupción extendida, el grupo terrorista Al Shabaab se ha consolidado como un actor destacado en la economía ilegal somalí, compitiendo con milicias clandestinas, líderes

militares, agentes gubernamentales y redes criminales transnacionales, arraigadas particularmente en Puntland y Somalilandia (según el Índice del Crimen Organizado Global, 2023).

Según datos del Anuario del Terrorismo Yihadista de 2023, Somalia se encuentra entre los países más afectados por el terrorismo, y Al Shabaab está considerado uno de los grupos terroristas más peligrosos en Somalia y Kenia⁴³. Esta organización, alineada con Al Qaeda, ataca tanto a las fuerzas de seguridad como a los civiles, empleando una amplia variedad de métodos, desde emboscadas y asedios hasta acciones suicidas. Aunque sufrió un periodo de debilitamiento en la última década, en los dos últimos años Al Shabaab ha recuperado gran parte de su capacidad, desafiando abiertamente al gobierno de Hassan Sheikh Mohamud y a su entorno (Igalada, 2024: 22).

La persistente inestabilidad en Somalia agrava las vulnerabilidades sociales y económicas de la población. La falta de Estado de derecho, el colapso de las estructuras estatales, las

.....
43 Para más información sobre las principales tendencias del terrorismo global véase Igalada, C. et al. (2024). *Anuario del Terrorismo Yihadista 2023*. Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo.

desigualdades de género y la insuficiente protección gubernamental hacen que los civiles sean especialmente susceptibles a diversas formas de violencia y abuso (de Brouwer, de Volder y Paulussen, 2020: 13). En este entorno de explotación continua, Al Shabaab juega un papel importante.

Similar al caso de Boko Haram, Al Shabaab no considera la industria de la explotación humana una fuente de ingresos significativa⁴⁴, sino que más bien forma parte de su estrategia operativa. La participación de Al Shabaab en la trata de personas sirve esencialmente como táctica de reclutamiento y de guerra, utilizando la coerción para forzar a las víctimas a servir a múltiples roles.

Si observamos la explotación infantil, vemos cómo Al Shabaab registra uno de los datos más significativos sobre el uso de niños con fines de reclutamiento y explotación, en aumento desde 2017. El Grupo de Expertos de Naciones Unidas registró en un informe de 2021 un aumento en los casos verificados de reclutamiento y explotación de niños

en comparación con el mismo período en 2020, más de tres cuartas partes de estos casos protagonizados por Al Shabaab. Según las cifras del informe, un total de 631 niños fueron reclutados y explotados, mientras que otros 348 fueron secuestrados, supuestamente con fines de reclutamiento. El informe también advirtió sobre jóvenes siendo secuestrados en madrasas (Grupo de Expertos, 2021: 32).

En 2021, Somalia registraba uno de los números más altos de secuestros de niños por actores no estatales en el mundo, especialmente a manos de Al Shabaab, para funciones de combate y apoyo (Departamento de Trabajo de Estados Unidos, 2021: 2). Estos reclutas sirven para una amplia gama de funciones relacionadas con la actividad terrorista, como colocar explosivos, actuar como escudos humanos y realizar ataques suicidas. Además de ser reclutadas por la fuerza, las víctimas de Al Shabaab han sido sometidas a la esclavitud sexual, niños incluidos. La organización también coacciona a las

.....
44 A pesar de ello, múltiples rutas migratorias pasan por territorios controlados por Al Shabaab en Somalia y Kenia, por lo que han sabido aprovecharse y establecer puestos de control y gravámenes en las rutas principales sin necesidad de tomar parte en la industria del contrabando de forma directa.

comunidades para que entreguen a sus hijos varones como niños soldados, imponiendo sanciones económicas a las familias que se niegan a cooperar.

Como parte de su estrategia de reclutamiento, el grupo ataca escuelas y mezquitas, obligando incluso a niños de muy corta edad a inscribirse en sus madrasas para recibir adoctrinamiento militar (Departamento de Estado de Estados Unidos, 2019: 465). Esta táctica también podría servir como un medio indirecto para promover la limpieza identitaria, similar a lo que hizo Estado Islámico, con el objetivo de formar a la próxima generación de combatientes de Al Shabaab en un futuro no muy lejano.

Además de los casos de violencia sexual contra niños documentados, las mujeres y niñas son también las principales víctimas de la trata de personas y este modus operandi es ya una seña de identidad para Al Shabaab. Aquellas desplazadas, especialmente de grupos marginados, suelen ser los colectivos con mayor riesgo de sufrir violencia por parte del grupo en forma de prácticas coercitivas y de extorsión entre las que se incluyen secuestros,

abusos sexuales, matrimonios forzados y castigos corporales (de Brouwer, de Volder y Paulussen, 2020: 13).

El reclutamiento de mujeres como método de violencia sexual suele ir destinado a satisfacer a los combatientes de la organización, manteniéndolos así alejados de la idea de regresar a sus hogares. Por ello, buena parte de estas terminan siendo utilizadas como esclavas sexuales o “esposas” de los insurgentes, mientras que otras son sometidas a trabajos domésticos forzados en los campamentos militares de Al Shabaab.

Entre los testimonios disponibles de aquellas que lograron escapar de la organización, algunos revelan cómo mujeres y niñas reclutadas o secuestradas, principalmente de comunidades marginadas y áreas empobrecidas, habían sido sometidas a abusos inimaginables (Jespersion, Ochieng y Burudi, 2022: 9). Las víctimas informan haber sufrido violaciones grupales, ser forzadas a consumir drogas y obligadas a realizar tareas domésticas como cocinar y limpiar en los campamentos de Al Shabaab.

El grupo trafica con mujeres y niñas desde las regiones costeras de Kenia hacia Somalia, bajo falsas promesas de empleo en el extranjero. Una vez en manos del grupo, estas personas son sometidas a esclavitud sexual. Algunas son mantenidas como esclavas sexuales, mientras que otras son forzadas a ser “esposas” de los insurgentes o se les asignan tareas de cocina y limpieza de armas, perpetuando un ciclo de abuso y control. La práctica de matrimonios forzados y esclavitud sexual es tan conocida entre los combatientes de Al Shabaab que incluso las comunidades bajo control del grupo casan a sus hijas, incluidas menores de edad, como medida de protección⁴⁵.



Niñas en campos de desplazados en Somalia. Fuente: UNICEF/Kate Holt

.....
45 Se documentó un caso en el que un hombre casó rápidamente a sus hijas con miembros que no pertenecían a Al Shabaab después de que uno de sus militantes golpeará a una de ellas por negarse a casarse con él.

La táctica de reclutamiento es el principal propósito de Al Shabaab para involucrarse en actividades de trata de personas, aunque algunas prácticas, como la violencia sexual, también se instrumentalizan como táctica de guerra. Esto les permite aterrorizar a la población y mantener el control sobre sus áreas de operación. Las principales víctimas de estas prácticas terminan siendo los refugiados, los desplazados, las minorías y las comunidades residentes en territorios controlados por el grupo. Estos cuatro colectivos son los más susceptibles de caer como víctimas de tráfico sexual y trabajo forzoso, lo cual resulta una forma eficaz de intimidar a la población y mantener la cohesión y la obediencia en zonas bajo su dominio.

En términos de radicalización y vulnerabilidad, los refugiados y desplazados internos asentados en campos de refugiados o en rutas migratorias poco seguras suelen ser los colectivos preferentes de Al Shabaab, confirmando el círculo vicioso entre el terrorismo y el desplazamiento (de Brouwer, de Volder y Paulussen, 2020; CTED, 2021; Jespersen,

Ochieng y Burudi, 2022) que responde paralelamente a la táctica de movilidad ya observada en el caso de Boko Haram en Nigeria. Las acciones de Al Shabaab, además de fomentar el terror y generar un importante impacto mediático, también buscan ejercer como impulsoras de desplazamientos masivos y la posterior formación de grandes campos de refugiados que generen mayores tensiones con las comunidades locales, aumenten el riesgo de radicalización entre los refugiados y generen mayores beneficios en su travesía hacia espacios más seguros.

Como guinda final a la táctica de guerra, coerción e intimidación que despliega Al Shabaab en sus espacios de influencia, merece la pena mencionar también la trata de personas como medio para fortalecer su estructura y operaciones de inteligencia. Según las evidencias, muchas de las mujeres somalíes se convierten en recopiladoras de información para la rama de inteligencia de Al Shabaab, el Amniyat, ya que no suelen levantar sospechas fácilmente en caso de que se produzca algún incidente (West, 2019). También existen registros que indican que

trabajadoras sexuales kenianas son explotadas para obtener información crítica de sus clientes, a menudo agentes de policía, por lo que hablamos de la explotación sexual no solo como un medio de control y terror, sino también como una herramienta de espionaje y obtención de información valiosa.

La participación de Al Shabaab en la trata de personas sirve esencialmente como táctica de reclutamiento y de guerra, utilizando la coerción para forzar a las víctimas a servir a múltiples roles

5. ESFUERZOS Y RECOMENDACIONES

Los casos de estudio previos revelan dos realidades fundamentales. Por un lado, que la trata de personas es una industria explotada por grupos terroristas con fines financieros, operativos o ambos. Por otro, y al igual que ocurre con el tráfico de drogas, armas y otros bienes, que sus niveles de participación no siempre cuentan con evidencias fáciles de encontrar. Sin embargo, la ausencia de pruebas inmediatas no implica que esta *hibridación* entre terrorismo y crimen organizado no exista. A lo largo de este documento, se ha demostrado cómo ambos tipos de actores criminales experimentan una relación de límites difusos a través de redes estratégicamente ubicadas en contextos específicos. Por tanto, cabe esperar que la interacción entre la explotación humana y el terrorismo tenga un mayor seguimiento en el futuro, al igual que ocurre con otros negocios criminales.

Las recomendaciones para abordar el fenómeno terrorismo-crimen organizado están alineadas con los esfuerzos vigentes para combatirlo. La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (UNTOC), o Convención de Palermo, estableció dos Protocolos específicos (2003 y 2004) que definen internacionalmente la trata de personas y el contrabando de migrantes, instando a los

Estados miembros a adoptar medidas legislativas para penalizar estas acciones (Jespersion, Ochieng y Burudi, 2022: 2). El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas también abordó la relación entre terrorismo y trata de personas mediante resoluciones significativas como la 2331 (2016) y la 2388 (2017), reconociendo la necesidad de fortalecer los mecanismos para combatir su interacción⁴⁶.

Aunque en los últimos años la lucha contra la conexión entre estos fenómenos criminales ha ganado protagonismo, lo cierto es que buena parte de la comunidad internacional sigue tratando a ambos por separado, a pesar de existir evidencias concretas de su vínculo. Además, la implementación efectiva de las medidas necesarias para combatirlos se ha enfrentado a múltiples obstáculos. Países como Nigeria y Somalia carecen de una legislación específica para abordar el terrorismo sexual, lo que plantea serios desafíos para perseguir y enjuiciar a grupos terroristas como

Boko Haram o Al Shabaab. Tampoco existe una armonización legislativa en el entorno regional donde los grupos terroristas operan en connivencia con el crimen organizado.

En Mali, las organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales han tenido que proporcionar apoyo logístico y financiero urgente a las víctimas de la violencia sexual perpetrada por JNIM, incluyendo tener que capacitar a jueces y abogados y presentar demandas en nombre de las víctimas, además de ofrecer apoyo psicológico (CTED, 2023: 50). Por su parte, en 2024 se ha conmemorado el décimo aniversario del genocidio yazidí a manos de Estado Islámico, una tragedia que aún no ha visto una suficiente rendición de cuentas.

En vista de todo ello, es evidente que queda un largo camino por recorrer y que las posibles vías de actuación, tanto en el plano legal como en el ámbito institucional, político y social, son múltiples.

.....
46 El Consejo fortaleció los instrumentos para combatir el vínculo entre ambos actores criminales, mientras que la resolución 2195 (2014) reconocía de una manera más directa la relación entre el terrorismo y la trata de personas. Para cuando la Resolución 2199 (2014) entraba en vigor, se produjo una condena tajante de los secuestros, explotación y abusos cometidos por grupos terroristas como Estado Islámico y el Frente Al Nusra. En resoluciones posteriores, como la 2242 (2015), la 2253 (2015), la 2368 (2017), la 2379 (2017) y la 2427 (2018), el Consejo de Seguridad reiteró su preocupación por los actos de violencia sexual y de género perpetrados por grupos terroristas, reconociendo que la trata de personas puede respaldar en términos financieros a los perpetradores y promoviendo la rendición de cuentas por estos abusos y violaciones.

Para abordar estas vías de actuación, es necesario entender previamente la motivación que impulsa la relación entre la trata de personas y el terrorismo, basándose en un razonamiento realista y pragmático que este documento ha tratado de desgranar. Si bien la industria de la explotación humana no es algo nuevo, su combinación con la violencia extremista es un fenómeno más reciente, impulsado por beneficios económicos y estratégicos compartidos. Por lo tanto, es fundamental mantener una vigilancia constante sobre la evolución de ambos desafíos, especialmente teniendo en cuenta la evolución del terrorismo y su naturaleza cambiante y dinámica.

Para la realidad actual, las recomendaciones deben aplicar un enfoque multidimensional a la hora de frenar o mitigar esta relación que combine medidas preventivas desde la perspectiva institucional, de aplicación de la ley, protección de víctimas, empoderamiento social y acciones coercitivas.

En primer lugar, es necesario fortalecer el marco institucional en los países afectados y promover una cooperación internacional efectiva. Esto implica crear, reforzar y aplicar las leyes nacionales que criminalicen la trata de personas y el contrabando de migrantes, asegurando que estas prácticas estén claramente tipificadas como delitos y armonizadas con el resto de los marcos legislativos regionales. Además, se debe fomentar la cooperación y la transparencia entre la administración pública, el ejecutivo, el legislativo, el judicial, la sociedad civil y el sector privado para garantizar una gobernanza efectiva y una disminución considerable de prácticas corruptas. También sería conveniente mejorar las capacidades de la policía, el ejército y los guardias fronterizos, así como la interoperabilidad de bases de datos y el análisis de datos de inmigración (Townsend y Mili, 2008).

En cuanto a la cooperación entre países, los responsables de las tomas de decisión política y las agencias de cooperación y aplicación de la ley desempeñan un papel fundamental. Que su interacción actual sea limitada, tal y como informan algunas fuentes, además de la falta de cooperación y de intercambio de información que caracteriza a la mayoría de las soluciones entre diferentes departamentos y agencias, suele ser un punto vulnerable que las redes criminales aprovechan para explotar. Por ello, los países deben fomentar la recopilación e intercambio de inteligencia multinivel, de lo local a lo regional, entre las agencias de aplicación de la ley y de enjuiciamiento (CTED, 2021: 43).

Consolidar la asociación público-privada también es un paso importante. Los organismos de la sociedad civil, las agencias locales, las redes comunitarias e incluso la población local tienen la capacidad de contribuir significativamente al trabajo de las agencias y organismos involucrados, proporcionando información crucial sobre las redes de tráfico humano, su posible relación con grupos e

individuos, y sus posibles vínculos con otros sectores, especialmente milicias y funcionarios públicos. Además, es recomendable promover una mayor cooperación internacional que mantenga la información actualizada, utilizando plataformas y bases de datos regionales e internacionales, acuerdos bilaterales de intercambio de información, fuentes oficiales y datos actualizados sobre el terreno.

Tanto para los datos nacionales como internacionales, es fundamental mejorar la tecnología y las capacidades de vigilancia. La aplicación de herramientas avanzadas de inteligencia artificial y análisis de grandes volúmenes de datos puede tener un valor incalculable a la hora de identificar patrones y conexiones entre actividades terroristas y de trata de seres humanos que de otro modo podrían pasar desapercibidas. El uso tecnológico debería también contar con un componente humano, por lo que aquí sería útil que las agencias identificaran a las redes, víctimas y colaboradores caso por caso siempre que fuera posible.

En cuanto a las penas para los contrabandistas en regiones de tránsito, es esencial aumentar la severidad de las sanciones. Por desgracia, las actividades de explotación humana asociadas al terrorismo o que tienen lugar en entornos de conflicto o posconflicto continúan siendo encontradas con una impunidad masiva. Sin ir más lejos, ningún miembro de Estado Islámico o Boko Haram ha sido procesado por delitos de violencia sexual u otras formas de explotación asociadas con la trata de personas hasta la fecha (CTED, 2021: 51).

Paralelamente a las medidas legislativas e institucionales, es crucial empoderar a las comunidades vulnerables o en riesgo mediante programas de sensibilización, educación y desarrollo económico para reducir su vinculación con actividades criminales. La explotación humana y el terrorismo en África y Oriente Medio son consecuencias de varios e interconectados vectores de riesgo. Por lo tanto, mejorar las condiciones de vida en los países de origen es esencial para combatir estos flagelos. Estas medidas no deben estar pensadas únicamente desde la perspectiva de las políticas de seguridad,

sino que también deben incluir mejoras en infraestructuras, reformas educativas, programas de desarrollo económico y la provisión de servicios básicos para disuadir a la ciudadanía de participar en actividades del crimen organizado.

Las víctimas juegan un papel muy importante en todo el entramado criminal de este estudio. Se deben establecer mecanismos sólidos para protegerlas, garantizando acceso a asistencia legal, atención médica y apoyo psicosocial para ayudar a construir una sociedad civil robusta. Las asociaciones con organizaciones de la sociedad civil que trabajan en programas de prevención y lucha contra el extremismo violento son igualmente relevantes a la hora de abordar el estigma y combatir la persecución de aquellos que escapan del control terrorista, diferenciando entre los que fueron reclutados a la fuerza y aquellos que se unieron voluntariamente. La educación desde la base es crucial si queremos eliminar el estigma al que se someten las víctimas, con un papel clave para las organizaciones de mujeres en la construcción de la paz (Jespersion, Ochieng y Burudi, 2022: 16).

Todas las medidas adoptadas deben ser consideradas desde una perspectiva que garantice el respeto a los derechos humanos de las víctimas y de las comunidades afectadas. La persistente conexión entre el crimen organizado y el terrorismo requerirá una vigilancia constante y una adaptación continua de las estrategias para abordarla de manera efectiva.

6. CONCLUSIONES

La interacción entre el terrorismo y el crimen organizado dedicado a la explotación humana es una realidad que impacta profundamente en los escenarios de seguridad en África y Oriente Medio. Este estudio ha examinado diversos casos que demuestran cómo el terrorismo no solo perpetúa conflictos, sino que también se aprovecha de la explotación humana como un medio para alcanzar objetivos financieros y operativos. Desde el enriquecimiento del capital financiero hasta tácticas de reclutamiento e intimidación, la trata y el contrabando de personas se han convertido en métodos sistemáticos empleados por grupos terroristas con la cooperación y

en ocasiones convergencia del crimen organizado para promover sus objetivos e intereses, exacerbando un ciclo de violencia y sufrimiento con escasas perspectivas de resolución.

Los factores subyacentes detrás de la participación terrorista en actividades de tráfico y contrabando de personas son complejos y dinámicos. La permeabilidad fronteriza, la inestabilidad política, los conflictos armados o el subdesarrollo económico son algunas de las principales variables que contribuyen a la vulnerabilidad de las poblaciones locales, facilitando una impunidad para los perpetradores que desemboca en una cronificación de las fuerzas que han propulsado la criminalidad en ambas regiones de estudio.

Cada uno de los cinco casos de estudio analizados revelan la diversidad de motivaciones que impulsan la participación terrorista en la industria de la explotación humana. Estado Islámico en Irak y Siria representa el ejemplo más significativo de cómo una organización terrorista puede utilizar este mercado criminal para lograr sus objetivos,

empleando la trata de seres humanos como método tanto financiero, con un engrose de sus arcas considerable, como operativo, basándose en unos fines de reclutamiento, guerra y limpieza identitaria. La brutalidad con la que las comunidades fueron tratadas, especialmente la yazidí, junto con la sistematización de estas prácticas, ejemplifica la capacidad que Estado Islámico ostentó, especialmente hasta 2019, para integrar el crimen organizado dentro de su estrategia terrorista.

En el caso de Libia, la intervención del crimen organizado en la economía postconflicto ha tenido un impacto significativo en la configuración de las dinámicas de poder entre las milicias rebeldes y otros actores armados. Durante su periodo de mayor influencia en el país entre 2015 y 2016, Estado Islámico desempeñó un papel activo en la explotación humana, aprovechando su red de contactos de alto nivel y estableciendo relaciones con líderes criminales locales. La trata de personas y el contrabando amplían los riesgos a la seguridad más allá de las fronteras de Libia, especialmente hacia Europa, por

lo que a pesar de la pérdida de poder y dominio territorial de Estado Islámico, todavía existe el temor a que el crimen organizado ayude a facilitar el traslado de combatientes de grupos terroristas al otro lado de la frontera europea.

En el caso de JNIM, tanto ahora como antes de su creación con AQMI, se ha podido confirmar que la filial de Al Qaeda ha obtenido grandes beneficios indirectos del tráfico y contrabando de personas ofreciendo tránsito seguro a cambio de un porcentaje de la tarifa de los individuos traficados. Además del aspecto financiero, JNIM persigue una estrategia de terror y guerra sobre las comunidades que somete, tanto en la triple frontera entre Mali, Níger y Burkina Faso como en las inmediaciones de los países del Golfo de Guinea (particularmente en Benín y Togo). JNIM permite a las comunidades continuar con sus actividades ilícitas a cambio de un pago y un reconocimiento de su autoridad política, por lo que su inacción y permisividad termina legitimando su presencia y poder. La colaboración con actores criminales locales es

esencial para mantener y amplificar su influencia, por lo que la expansión de la organización hacia el sur del Sahel y su implicación en la economía informal y criminal de la zona amenaza con incrementar la inestabilidad y la criminalización en espacios más amplios de África Occidental.

En Nigeria, la economía criminal está profundamente arraigada en una red bien estructurada, aprovechando la debilidad institucional y la corrupción manifiesta en los principales sectores públicos. Boko Haram encuentra en este contexto una oportunidad única para emplear la trata de personas con múltiples propósitos, incluyendo tareas de reclutamiento, limpieza identitaria y explotando a las comunidades como táctica de guerra. Aunque sus objetivos operativos son predominantes, es recurrente la participación de Boko Haram en este mercado para financiarse a través de secuestros y extorsiones. El grupo también se beneficia de la inseguridad y el desplazamiento masivo provocados por los conflictos regionales que él mismo genera, por lo que su único

obstáculo para aumentar su participación en actividades de explotación humana es su propia limitación para erigirse como la fuerza terrorista dominante en la cuenca del lago Chad.

Finalmente, Al Shabaab mantiene una relación continuada con la explotación humana como método de reclutamiento y de guerra, especialmente de colectivos marginados. Somalia ha experimentado más de tres décadas de caos e inseguridad, lo que ha exacerbado las actividades delictivas que ya estaban presentes. En este contexto de ausencia de autoridad estatal efectiva, el crimen organizado ha surgido como una fuerza que impone cierto orden, dando forma a la economía nacional a través de actividades como el tráfico ilegal de armas, la piratería, el contrabando de personas y el narcotráfico. Al Shabaab se ha convertido en un actor destacado dentro de este entramado de la economía criminal somalí, compitiendo con otras milicias, líderes militares y redes criminales transnacionales. Además de sus actividades terroristas, Al Shabaab se involucra activamente en la trata de

personas como parte de su estrategia operativa. Esto incluye el reclutamiento de niños para diversas funciones prácticas, como la colocación de explosivos, la ejecución de ataques y el apoyo logístico. También trafica con mujeres y niñas, obligándolas a someterse a esclavitud sexual, utilizándolas como “esposas” de los insurgentes y aprovechándolas para recabar información crucial para sus operaciones de inteligencia.

Como ocurre con otros mercados criminales, el crimen organizado, el terrorismo y el conflicto son elementos que se refuerzan mutuamente. Es evidente que la explotación humana no solo tiene consecuencias devastadoras para las víctimas individuales, sino que también amenaza la seguridad y estabilidad de regiones cada vez más amplias hasta convertirlo en un problema global que socava los esfuerzos conseguidos para promover la paz, el desarrollo sostenible y el orden social.

Teniendo en cuenta la participación activa del terrorismo en actividades del crimen organizado, así como las posibilidades de expansión que la agenda

del extremismo violento contempla en espacios concretos de África, los esfuerzos nacionales e internacionales han buscado combatir y perseguir estos crímenes para tratar de coartar una mayor intensificación de su relación. Sin embargo, los marcos legislativos y cooperativos actuales carecen de varios puntos clave para su éxito, incluyendo la falta de confianza regional a la hora de compartir información, la falta de cultura judicial en perseguir ciertos delitos como el terrorismo sexual o la ausencia de legislación específica para casos de vulneración de derechos humanos por parte de grupos terroristas. Por tanto, es necesario establecer un nuevo enfoque que contemple las anteriores limitaciones, especialmente en vista del rápido ascenso terrorista y, por tanto, la mayor probabilidad de una intensificación de la relación entre ambos fenómenos criminales.

Los gobiernos regionales, las organizaciones internacionales y la sociedad civil son tres de los actores más importantes que deben aunar fuerzas en la lucha contra la explotación humana y sus vínculos con el terrorismo. Solo a

través de una acción coordinada y determinada se podrá esperar lograr avances significativos en la protección de los derechos humanos, la seguridad y la estabilidad en África, Oriente Medio y el resto de escenarios interconectados en el sistema de seguridad global.

7. REFERENCIAS

Afriyie, F. (2024). Weaving through the maze of terrorist marriages in Africa's Sahel region: Jama'at Nasr Al Islam wal Muslimin (JNIM) under review, *Cogent Social Sciences*, 10:1.

Aguilera, A. (2022). *Tráfico de drogas y yihadismo en África*. Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo.

Aguilera, A. (2023a). *El papel de Libia como centro consolidado de economías ilícitas y su impacto en el fenómeno terrorista del Sahel*. Revista del Instituto Español de Estudios Estratégicos, n° 23.

Aguilera, A. (2023b). *Terrorismo y crimen organizado: tráfico y contrabando de armas en el norte de África y el Sahel*. Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo.

Aguilera, A. (2024). *Actividad yihadista en el Magreb y en África Occidental en 2023* en Igualada, C. (2024). *Anuario del Terrorismo Yihadista 2023*. Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo.

Amnistía Internacional. (2024). *Ten years on: The women of Chibok speak out*.

Ani, N. (2023). *Economic warfare in southern Mali: Intersections between illicit economies and violent extremism*. Comisión de la CEDEAO, OCWAR-T Research Report 13.

Avdan, N. y Omelicheva, M. (2021). Human Trafficking-Terrorism Nexus: When Violent Non-State Actors Engage in the Modern-Day Slavery. En *Journal of Conflict Resolution*, 1-31.

Banco Mundial. (n.d.). *Inflation, consumer prices (annual %)*.

Beevor, E. (2022). *JNIM in Burkina Faso: A strategic criminal actor*. Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC).

Beqiri, F., Maloku, E. y Maloku, A. (2023). *Human Organ Trafficking: Perspective from Criminal matters, Business, and Human Rights*. Access to Justice in Eastern Europe.

Berger, F. (2023). *The Silent Threat: kidnappings in Burkina Faso*. Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC).

Berger, F., Tagziria, L. y Mossi, A. (2024). *Hostage to violent extremism: Kidnapping in northern Benin*. Comisión de la CEDEAO, OCWAR-T Research Report 15.

Brooks, S. (2010). *Somalia: Illicit Economies, Criminal Networks and the Downfall of the Somali State*. Faculty of the Graduate School of Arts and Sciences, Georgetown University.

Caballero, A. y Crespo, R. (2018). Secuestros de españoles por grupos terroristas: ¿existen alternativas al rescate económico?, *Revista de Estudios en Seguridad Internacional*, 4:2.

Caparini, M. (2022). *Conflict, Governance and Organized Crime: Complex Challenges for UN Stabilization Operations*. Stockholm International Peace Research Institute [SIPRI].

Center for Security Studies [CSS]. (2013). *Kidnapping for Ransom as a Source of Terrorism Funding*. CSS Analysis n° 141.

Chatzis, I. (2024). *Links Between Smuggling of Migrants and Other Forms of Organized Crime Along the Central and Western Mediterranean Routes*. Human Trafficking and Migrant Smuggling Section, United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC).

Cohen, D. K. (2013). Explaining Rape During Civil War: Cross-national Evidence (1980-2009). *American Political Science Review*, 107:3.

Comité contra el Terrorismo del Consejo de Seguridad [CTED]. (2021). *Identifying and Exploring the Nexus between Human Trafficking, Terrorism, and Terrorism Financing*.

Comité contra el Terrorismo del Consejo de Seguridad [CTED]. (2023). *Towards Meaningful Accountability for Sexual and Gender-Based Violence Linked to Terrorism*.

Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. (2016). *They came to destroy: ISIS Crimes Against the Yazidi*.

Consejo de Seguridad de Naciones Unidas [CSNU]. (2008). *Resolución 1820 (2008)*

Consejo de Seguridad de Naciones Unidas [CSNU]. (2015). *Declaración de la Presidencia del Consejo de Seguridad*.

Consejo de Seguridad de Naciones Unidas [CSNU]. (2017a). *Report of the Secretary-General on conflict-related sexual violence*. S/2017/249

Consejo de Seguridad de Naciones Unidas [CSNU]. (2017b). *Report of the Secretary-General on children and armed conflict in Nigeria*. S/2017/304

Consejo de Seguridad de Naciones Unidas [CSNU]. (2018a). *Ahmad Oumar Imhamad Al Fitouri*.

Consejo de Seguridad de Naciones Unidas [CSNU]. (2018b). *Mus'ab Mustafa Abu Al Qassim Omar*.

Crawford, M. (2017). *International Sex Trafficking*. *Women & Therapy*, 40:1-2.

Crowcroft, O. (2015). *Isis: People trafficking, smuggling and punitive taxes boost Islamic State economy*. *International Business Times*.

Departamento de Estado de Estados Unidos. (2019). *2018 Trafficking in Persons Report*.

Departamento de Trabajo de Estados Unidos. (2021). *2021 Findings on the Worst Forms of Child Labor: Somalia*.

Departamento del Tesoro. (2024). *2024 National Terrorist Financing Risk Assessment*. US Department of the Treasury.

Farley, A. (2018). *The New Slave Trade: Migration, Trafficking, and Terrorists in Libya*. *New Security Beat*.

Forest, J. (2019). *Crime-Terror Interactions in Sub-Saharan Africa*, *Studies in Conflict & Terrorism*.

Gebrekidan, S. (2016). *Special Report: Behind the refugee crisis, families in the West willing to pay and pay*. *Reuters*.

Global Initiative Against Transnational Organized Crime. (2023a). *Índice del Crimen Organizado Global 2023*.

Global Initiative Against Transnational Organized Crime. (2023b). *Nigeria*

Grupo de Acción Financiera Internacional [GAFI]. (2022). *ML/TF Risks Arising from Migrant Smuggling*.

Grupo de Expertos. (2020). *Letter dated 28 February 2020 from the Panel of Experts established pursuant to resolution 2374 (2017) on Mali addressed to the President of the Security Council*. Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

Grupo de Expertos. (2021). *Letter dated 5 October 2021 from the Chair of the Security Council Committee pursuant to resolution 751 (1992) concerning Somalia addressed to the President of the Security Council*. Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

Grupo de Expertos. (2023a). *Carta de fecha 14 de septiembre de 2023 dirigida a la Presidencia del Consejo de Seguridad por el Grupo de Expertos sobre Libia establecido en virtud de la resolución 1973 (2011)*. Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

Grupo de Expertos. (2023b). *Letter dated 13 February 2023 from the Chair of the Security Council Committee pursuant to resolutions 1267 (1999), 1989 (2011) and 2253 (2015) concerning Islamic State in Iraq and the Levant (Da'esh), Al Qaida and associated individuals, groups, undertakings and entities addressed to the President of the Security Council*. Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

Hernández, J. (2013). *Terrorism, Drug Trafficking, and the Globalization of Supply*. *Perspectives on Terrorism*, 7:4.

Huckerby, J. (2019). *When Human Trafficking and Terrorism Connect: Dangers and Dilemmas*. Just Security.

Igualada, C. (2024). *Terrorismo yihadista global: tendencias, actores y escenarios en 2023* en Igualada, C. (2024). *Anuario del Terrorismo Yihadista 2023*. Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo.

Índice Global de la Esclavitud. (2023).

Índice Global del Terrorismo. (2024). Institute for Economics & Peace (IEP).

Jawad, A. (2016). *Archive of Islamic State Administrative Documents*. Pundicity

Jespersion, S., Ochieng, I. A. y Burudi, W. (2022). *Addressing the Links Between Human Trafficking, Migrant Smuggling, and Terrorism in Eastern Africa*. Issue Paper 2 / 2022. EAPCCO CTCoE.

Kenny, C. y Malik, N. (2019). *Trafficking Terror and Sexual Violence: Accountability for Human Trafficking and Sexual and Gender-based Violence by Terrorist Groups under the Rome Statute*. En *Vanderbilt Journal of Transnational Law*, 52:43.

Khan, S. (n.d.). *Editor's Piece: The Ideological Roots of the Ethnic Cleansing of the Hazara – A Historical Perspective*. Tezhib-Habib University.

Lacher, W. (2012). *Organized Crime and Conflict in the Sahel-Sahara Region*. The Carnegie Papers. Carnegie Endowment for International Peace.

Levallois, A., Cousseran, J.C. y Kerrello, L. (2017). *The financing of the 'Islamic State' in Iraq and Syria (ISIS)*. Dirección General de Políticas Exteriores de la Unión Europea.

Liv, N. (2019). *An Examination of a Potential Connection between the Trafficking of Women on the Darknet and the Financing of Terrorism*. International Institute for Counter-Terrorism (ICT).

Malik, N. (2017). *Trafficking Terror: How Modern Slavery and Sexual Violence Fund Terrorism*. The Henry Jackson Society.

Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito [UNODC]. (2024). *Links Between Smuggling of Migrants and Other Forms of Organized Crime Along the Central and Western Mediterranean Routes*.

Organización Internacional del Trabajo [OIT]. (2019). *Identifying and exploring the nexus between human trafficking, terrorism, and terrorism financing*.

Paul, C., Clarke, C. y Grill, B. (2010). *Victory Has a Thousand Fathers: Sources of*

Success in Counterinsurgency. RAND Corporation.

Reglamento de la UE 2016/44. (2016). Unión Europea.

Reuters. (2016). *Islamic State sanctioned organ harvesting in document taken in U.S. raid*.

Revkin, M., y Wood, E. (2021). The Islamic State's pattern of sexual violence: ideology and institutions, policies and practices. En *Journal of Global Security Studies*, 6(2).

Romanet, J.L. (2020). *Human Trafficking, Smuggling and Governance In Libya: Implications for Stability and Programming*. USAID.

Ruiz, M. (2024). *Amarás y respetarás a Estado Islámico: la violencia sexual como arma de terror contra las mujeres yazidíes en Irak*. *Revista Internacional de Estudios sobre Terrorismo*, 11.

Sampaio, A. et al. (2023). *Reserve Assets: Armed Groups and Conflict Economies in the National Parks of Burkina Faso, Niger and Benin*. Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC)

Secretario General sobre la violencia sexual relacionada con los conflictos. (2018). *Informe del Secretario General sobre la violencia sexual relacionada con los conflictos*. Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. S/2018/250.

Townsend, J. y Mili, H. (2008). *Human Smuggling and Trafficking: An International Terrorist Security Risk?* CTC Sentinel.

Transparencia Internacional. (2023). *Corruption Perceptions Index*

Trauthig, I. (2019). *Assessing the Islamic State in Libya*. Europol.

United Nations Development Programme [UNDP]. *The 2023/2024 Human Development Report*.

United Nations Office on Drugs and Crime [UNODC]. (2017). *Handbook on Children Recruited and Exploited by Terrorist and Violent Extremist Groups: The Role of the Justice System*.

Garver-Affeldt, J. et al. (2022). *Smuggling of Migrants in the Sahel: Transnational Organized Crime Threat Assessment — Sahel*. Transnational Organized Crime Threat Assessment (TOCTA). United Nations Office on Drugs and Crime [UNODC].

United Nations University. (2016). *Fighting human trafficking in conflict, 10 Ideas for Action*. United Nations Security Council.

Viriyapah, M. (2020). *Mapping the Nexus between Human Trafficking and Terrorism in Libya*. American Security Project [ASP].

Weiss, C. et al. (2023). *Fatal Transaction: The Funding Behind the Islamic State's Central Africa Province*. Program on Extremism. George Washington University.

West, S. (2019). *Asset or Victims: A Portrait of Women Within al-Shabaab*. Terrorism Monitor Volume 17(6). The Jamestown Foundation.